



— REPUBLICA ARGENTINA —

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

21^a REUNION – 19° SESION ORDINARIA
26 DE NOVIEMBRE DE 2008

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. JULIO CESAR CLETO COBOS, y del señor vicepresidente del Honorable Senado, senador JUAN CARLOS ROMERO

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor D. JORGE LUIS ALBERTO TIEPPO

Prosecretarios:

Señor D. JUAN J. CANALS, señor D. MARIO DANIELE y señor D. GUSTAVO C. VELEZ



PRESENTES:

BASUALDO, Ricardo G.
 BIANCALANI, Fabio Darío
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
 CABANCHIK, Samuel Manuel
 CALCAGNO Y MAILLMANN, Eric
 CASTILLO, Oscar A.
 COLAZO, Mario Jorge
 CORREGIDO, Elena Mercedes
 DÍAZ, María Jorge
 ESCUDERO, S. Margarita
 ESTENSSORO, María Eugenia
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FORSTMAN, Selva Judith
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GALLEGU, Silvia E.
 GIOJA, César A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 GUINLE, Marcelo A. H.
 LATORRE, Roxana Itatí
 LORES, Horacio
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MARTÍNEZ, José C.
 MASSONI, Norberto
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo Rubén
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 NIKISCH, Roy Abelardo
 OSUNA, Blanca Inés
 PARRILLI, Nanci María Agustina
 PERCEVAL, María C.
 PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.

PICHETTO, Miguel Ángel
 PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
 QUINTELA, Teresita Nicolasa
 RACHED, Emilio Alberto
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRIO, Marina R.
 RÍOS, Roberto Fabián
 RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
 ROMERO, Juan Carlos
 ROSSI, Carlos Alberto
 SAADI, Ramón Eduardo
 SALAZAR, Carlos Eduardo
 SÁNCHEZ, María Dora
 SANZ, Ernesto Ricardo
 URQUÍA, Roberto Daniel
 VERANI, Pablo
 VIANA, Luis Alberto
 VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTES CON AVISO:

BONGIORNO, María José
 COLOMBO DE ACEVEDO, María T. del Valle
 CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
 FILMUS, Daniel Fernando
 GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
 ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
 JENEFES, Guillermo Raúl
 MARÍN, Rubén Hugo
 MAZA, Ada Mercedes
 PAMPURO, José Juan Bautista
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 TORRES, Eduardo Enrique
 TROADELLO, Mónica
 VERA, Arturo

EN COMISION:

VIGO, Élida María

CON LICENCIA:

MENEM, Carlos Saúl

SUMARIO

- | | |
|---|--|
| <p>1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 9)</p> <p>2. Asuntos entrados. (Pág. 9)</p> <p>3. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 9)</p> <p>4. Pensiones antárticas - Moción de preferencia. (Pág. 12)</p> <p>5. Descuento en pasajes para estudiantes - Moción de preferencia. (Pág. 13)</p> <p>6. Acuerdo:</p> <p style="padding-left: 40px;">P.E. 183: Categoría "A" embajador extraordinario y plenipotenciario. (Pág. 13)</p> | <p>P.E. 252: Defensor público oficial adjunto de la Defensoría General de la Nación. (Pág. 13)</p> <p>P.E. 295: Grado inmediato superior a teniente coronel médico del Ejército. (Pág. 13)</p> <p>7. Consideración en conjunto de órdenes del día:</p> <p style="padding-left: 40px;">O.D. 748: Declaración repudiando la publicación del "test Tyson" en la edición electrónica de la revista "Hombre". (Pág. 15)</p> <p style="padding-left: 40px;">O.D. 919: Beneplácito por la iniciativa de alumnos y docentes de una escuela de Mendoza, de confeccionar equi-</p> |
|---|--|

- O.D. 1.035: Declaración expresando reconocimiento a la labor de los Cascos Azules. (Pág. 18)
- O.D. 1.036: Solicitud de informes sobre las medidas adoptadas para el dique de carena de la Base Naval Puerto Belgrano. (Pág. 18)
- O.D. 1.037: Beneplácito por el inicio de negociaciones de los presidentes sudamericanos, para la creación del Consejo Sudamericano. (Pág. 18)
- O.D. 1.038: Beneplácito por la iniciativa de los gobiernos de la Argentina y Chile, conocida como Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur. (Pág. 18)
- O.D. 1.051: Declaración expresando repudio por el aniversario del golpe de Estado que derrocara al presidente Juan Domingo Perón. (Pág. 18)
- O.D. 1.052: Beneplácito por el desarrollo de elementos en base a nanotecnología aplicada al área de Salud y Defensa Nacional. (Pág. 18)
8. O.D. 655: Nombramiento del procurador penitenciario. (Pág. 18)
9. O.D. 1.205: Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. (Pág. 24)
10. Retiro de un proyecto. (Pág. 24)
11. O.D. 1.205: Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (continuación). (Pág. 24)
12. Reincorporación de un proyecto. (Pág. 47)
13. O.D. 1.075: Enfermedad celíaca. (Pág. 48)
14. O.D. 76: Regulación de la cadena de frío de los medicamentos. (Pág. 52)
15. O.D. 1.113: Registro de Identificación Genética de Abusadores Sexuales. (Pág. 53)
16. C.D. 69: Prórroga del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. (Pág. 58)
17. O.D. 903: Consejo Federal de Adultos Mayores. (Pág. 60)
18. O.D. 1.111: Sistema de pasantías educativas. (Pág. 61)
19. C.D. 45/07: Modificación de la ley 20.744, Contrato de Trabajo. (Pág. 64)
- S.-1.507/07 y S.-4.205/08: Régimen de jubilación preferencial para trabajadores de la industria de la construcción. (Pág. 64)
20. S.-1.507/07 y S.-4.205/08: Régimen para los trabajadores de la construcción. (Pág. 66)
21. Propuesta de metodología de votación. (Pág. 67)
22. O.D. 881, O.D. 882, O.D. 1.050: Creación de un tribunal oral y dos juzgados. (Pág. 67)
- O.D. 881: Creación de un tribunal oral en lo Criminal Federal en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (Pág. 67)
- O.D. 1.050: Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N°3, en San Miguel de Tucumán. (Pág. 67)
- O.D. 882: Creación del Juzgado Federal N° 4 de la ciudad de Mendoza. (Pág. 67)
23. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley sobre cesión de inmuebles. (Pág. 68)
- O.D. 119: Transferencia de un inmueble a la provincia de La Rioja. (Pág. 68)
- O.D. 125: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Barranqueras, Chaco. (Pág. 68)
- O.D. 126: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (Pág. 68)
- O.D. 189: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Goya, Corrientes. (Pág. 68)
- O.D. 262: Transferencia de un inmueble a la provincia del Chaco. (Pág. 68)
- O.D. 616: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Gancedo, Chaco. (Pág. 68)
- O.D. 888: Transferencia de un inmueble a la provincia de Formosa. (Pág. 68)
- O.D. 1.157: Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. (Pág. 68)
24. O.D. 1.159 (N.I.): Régimen de protección integral e individualización del binomio madre-hijo. (Pág. 68)

S. 4.203: Homenaje al folklorista Félix Máximo María. (Pág. 76)

S. 4.204: XXIII Edición del Festival de la “Calle Angosta”. (Pág. 76)

S. 3.740: Declaración de interés de la campaña “Cuando discriminamos... no miramos los zapatos”. (Pág. 76)

S. 2.048: Construcción de variante del cruce de la ruta nacional 12. (Pág. 76)

S. 2.049: Reparación y mejoramiento de la ruta nacional 127. (Pág. 76)

S. 2.271: Ruta nacional 12 y su similar provincial 6 en la provincia de Buenos Aires. Pedido de informes. (Pág. 76)

S. 4.096: Medidas para rehabilitar un registro seccional dependiente de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor en la ciudad de Federación, Entre Ríos. (Pág. 76)

S. 4.097: Habilitación de una oficina de la AN-SES en la ciudad de Federación, Entre Ríos. (Pág. 76)

S. 4.098: Habilitación de una oficina de la AN-SES en la ciudad de Federal, Entre Ríos. (Pág. 76)

S. 3.952: Declaración de interés nacional del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. (Pág. 76)

S. 4.012: Adhesión al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. (Pág. 76)

S. 4.189: Adhesión al Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer. (Pág. 76)

31. S. 4.213: Prohibición de exhibición por medios televisivos. (Pág. 76)

32. S. 4.214: Otorgamiento de condición de refugiados a familiares de ciudadano mexicano. (Pág. 77)

33. Apéndice:

I. Asuntos entrados. (Pág. 79)

II. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 257)

III. Actas de votación. (Pág. 493)

IV. Inserciones. (Pág. 529)

NOTA: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el Apéndice.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 13 del miércoles 26 de noviembre de 2008:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador Fabio Darío Biancalani a izar la bandera en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor senador Biancalani procede a izar la bandera en el mástil del recinto. *Aplausos.*

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a los efectos de que las señoras y los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

3

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 26/11/08.

Sesión para consideración de acuerdos.

Consideración en conjunto de las órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración. (Anexo I.)

Consideración de las órdenes del día de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo: 655.

Consideración de las órdenes del día con proyecto de ley: 1.205, 1.075, 76, 1.113 (NI), 903, 1.111 (NI) 881, 1.050, 1.159 (NI), 525, 882, 1.156, 1.011, 119, 125, 126, 189, 262, 616, 888, 1.157 y 1.225 (NI).

Consideración de los asuntos sobre tablas acordados:

Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el día 30 de diciembre de 2009, inclusive, la vigencia del gravamen establecido por la ley 25.063,

título V, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y sus modificaciones (C.D.-69/08) (O.D.-1.206 NI).

Dictamen en el proyecto de ley en revisión transfiriendo a título gratuito un inmueble de propiedad del Estado nacional a la Municipalidad del departamento capital de La Rioja, con destino al funcionamiento de la entidad Avocación Civil Atlético Racing Club (C.D.-148/07) (O.D.-1.223 NI).

Dictamen el proyecto de ley de los senadores Jeneffes, Marino y Corregido, creando en el ámbito de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor el Registro Público Nacional “No Llame”. (S.-166/07 y 49/08.) (O.D.-1.221 NI.)

Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. (S.-3.952/08 y otros.)

Tratamientos sobre tablas a solicitar:

Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, declarando de interés educativo la tercera campaña de información y concientización sobre la presencia de arsénico en el agua de consumo. (S.-3.707/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso rindiendo homenaje al teniente general Juan Esteban Pedernera. (S.-3.997/08.)

Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (S.-3.998/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del 25º aniversario de la creación del Centro Integral para Discapitados Mentales “Cosechando Tiempo”. (S.-3.999/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento hacia el docente e investigador Esteban G. Jobbagy de la Universidad Nacional de San Luis. (S.-4.002/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando reconocimiento al arquitecto Bruno Emmer por su labor en el proyecto “El mirador”. (S.-4.001/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, expresando preocupación por los efectos nocivos que produce el ensanchamiento del agujero de la capa de ozono. (S.-4.000/08.)

Proyecto de declaración del senador Fernández, declarando de interés las actividades de la Peña de la Ribera. (S.-2.469/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 10º aniversario de la Fundación del Centro de Encuentro y Terapias para personas con capacidades diferentes. (CET.) (S.-1.210/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la Fiesta de las Culturas. (S.-3.471/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la XXI Fiesta Nacional de Reinas Nacionales. (S.-3.472/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la Fiesta Provincial de la Carne. (S.-3.513/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento a la ingeniera civil Romina Porta. (S.-3.866/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje a un nuevo aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio. (S.-3.884/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés la Feria Latinoamericana del Libro Rosario 2008. (S.-3.895/08.)

Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. (S.-3.663/08.)

Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo al Día de la Policía Federal. (S.-3.664/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración de la XIV Fiesta Provincial del Transporte. (S.-3.898/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la prueba automovilística “La carrera del siglo pasado”. (S.-3.946/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por la celebración del 135º aniversario de la fundación de la institución La Unión y Benevolenza Dante Alighieri. (S.-3.947/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo al Día Nacional de la Prevención del Abuso Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. (S.-3.951/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día de la Militancia. (S.-4.010/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la Recuperación del Estado Democrático. (S.-4.009/08.)

Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés las publicaciones “Diccionario Mapuche” y “Telar mapuche de pie sobre la Tierra”. (S.-3.017/08.)

Proyecto de declaración del senador Saadi, rindiendo homenaje a Saúl Ubaldini. (S.-3.821/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el libro *EL Huerquen, interculturalidad y educación*. (S.-4.043/08.)

Dictamen en el proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día del Jubilado. (S.-2.904/08.)

Proyecto de declaración del senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción. (S.-3.978/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Troadello, expresando beneplácito por la celebración del Día del Agua y del Trabajador de Irrigación. (S.-4.050/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Troadello, expresando beneplácito por el otorgamiento del Premio Conicet a investigadoras de la Universidad Nacional de Cuyo. (S.-4.049/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Troadello, manifestando beneplácito por la distinción otorgada al estudiante Martín Noguerol, en la Olimpíadas Nacionales de Historia. (S.-4.048/08.)

Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando preocupación ante la demora en la reparación del rompehielos “Irizar”. (S.-1.023/08.)

Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño. (S.-3.892/08.)

Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día de los Parques Nacionales Argentinos. (S.-4.003/08 y otros.)

Proyecto de declaración de la senadora Perceval, manifestando pesar y solidaridad con el pueblo de la República de Haití, por el derrumbamiento de una escuela en Puerto Príncipe. (S.-4.066/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Perceval y Filmus, declarando de interés la realización del IX Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros y Periferias: Equilibrio y Asimetrías en las Relaciones de Poder”. (S.-3.833/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Perceval, expresando pesar por el fallecimiento del escritor Nicolás Casullo. (S.-3.598/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Perceval, adhiriendo a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. (S.-3.561/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Perceval, expresando dolor por el fallecimiento del padre Jorge Contreras. (S.-3.837/08.)

Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo al 110° aniversario del diario *El Liberal*. (S.-4.013/08; O.D.-1.204 NI.)

Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, declarando de interés la trayectoria y el aporte a la tradición a través de la danza y el folklore del “Ballet de Danzas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero”. (S.-4.185/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día Universal de la Música. (S.-4.191/08.)

Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la realización de la LXIV Edición del Festival Nacional de Doma y Folklore. (S.-3.939/08.)

Proyecto de declaración del senador Verani, expresando satisfacción por el otorgamiento al Instituto Balseiro del Premio Konex de Platino 2008. (S.-4.063/08.)

Proyecto de declaración del senador Verani, expresando satisfacción por el Premio Konex de Platino 2008 a la empresa INVAP. (S.-4.064/08.)

Proyecto de declaración de la senadora Viudes, declarando de interés la campaña “Cuando Maltratan a una Maltratan a Todas”. (S.-4.190/08.)

Proyecto de declaración del senador Romero expresando beneplácito por la participación de Adrián Zelaya en la competencia sobre fundamentos aeronáuticos. (S.-3.375/08.)

Proyecto de declaración del senador Romero rindiendo homenaje al ex presidente de la Nación don Victorino de la Plaza. (S.-3.465/08.)

Proyecto de declaración del senador Romero adhiriendo a la conmemoración del 39° aniversario de la fundación de la Base Marambio. (S.-3.857/08.)

Proyecto de declaración del senador Romero adhiriendo a la conmemoración del 53° aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (S.-3.864/08.)

Dictamen en el proyecto de declaración del senador Saadi adhiriendo a la celebración del Día del Petróleo. (S.-3.522/08.) (O.D.-1.243 NI.)

Proyecto de declaración del senador Saadi expresando beneplácito por el aniversario del Día de la Defensa Civil. (S.-3.611/08.)

Dictamen en el proyecto de resolución de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso saludando al pueblo y gobierno del Brasil al celebrarse el aniversario del Día de la Amistad Argentina-Brasileña. (S.-3.678/08.)

Dictamen en diversos proyectos de declaración de varios senadores adhiriendo al Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. (S.-3.131/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día Internacional de la Personas con Discapacidad. (S.-3.363/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached rindiendo homenaje a la memoria del doctor Oreste Di Lullo. (S.-2.047/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a los festejos del aniversario de la localidad de Pinto, Santiago del Estero. (S.-3.171/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés al acto del centenario de la Escuela N° 760 “Cabo Néstor David Córdoba” de Santiago del Estero. (S.-3.486/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached expresando beneplácito por el galardón “Gran Cruz de la Orden del Mérito Cultural” a Mercedes Sosa. (S.-3.624/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés de la Fiesta Nacional del Bombo. (S.-3.858/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés los libros de aventura, trabajo y poder de los doctores Alberto Tasso y Antonio Castiglione. (S.-3.941/08.)

Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (S.-3.944/08.)

Proyecto de comunicación del senador Rached solicitando las medidas para difundir el beneficio de exención del pago del trámite de DNI para personas carentes de recursos. (S.-2.978/08.)

Proyecto de comunicación de varios senadores solicitando informes acerca de las medidas adoptadas en relación a los hurtos de que son objeto los meteoritos caídos en la zona de Santiago del Estero y Chaco. (S.-3.487/08.)

Proyecto de comunicación de los senadores Rached e Iturrez de Cappellini, solicitando las medidas para construir una doble vía de circulación en los tramos urbanos de diversas localidades de Santiago del Estero. (S.-3.623/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje al folklorista Félix Máximo María. (S.-4.203/08.)

Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá declarando de interés cultural y turístico la XXIII Edición del Festival de la “Calle Angosta”. (S.-4.204/08.)

Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidehoff declarando de interés la campaña “Cuando discriminamos... no miramos los zapatos”. (S.-3.740/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando las medidas para la construcción de variante del cruce de la ruta nacional 12. (S.-2.048/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera y otros solicitando medidas para la reparación y mejoramiento de la ruta nacional 127. (S.-2.049/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando informes sobre las rutas nacional 12 y su similar provincial 6 en la provincia de Buenos Aires. (S.-2.271/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se arbitre medidas para rehabilitar un registro seccional dependiente de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor en la ciudad de Federación, Entre Ríos. (S.-4.096/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se habilite una oficina de la ANSES en la ciudad de Federación, Entre Ríos. (S.-4.097/08.)

Proyecto de comunicación del senador Vera solicitando se habilite una oficina de la ANSES en la ciudad de Federal, Entre Ríos. (S.-4.098/08.)

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Miranda. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Miranda.

Sr. Miranda. – Señor presidente: solicito que se reserven en mesa los proyectos de ley C.D.-45/07 y S.-1507/07, ambos con dictámenes en mayoría aprobados por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sr. Presidente. – Se reservan en mesa.

4

PENSIONES ANTARTICAS - MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Martínez (A.). – Solicito una preferencia para la próxima sesión del proyecto 1.112/08 sobre reconocimiento de lo que son las pensiones antárticas. Es un proyecto que viene con sanción de la Cámara de Diputados y si no lo tratamos en el transcurso de estas sesiones, lamentablemente se va a caer. Cuenta con dictamen unánime de las tres comisiones a las cuales fue girado. De modo que solicito la preferencia.

Sr. Presidente. – En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, porque el proyecto mencionado por el señor senador Alfredo Martínez tiene dictamen de comisión, por lo que pensamos incorporarlo para su tratamiento en la sesión del miércoles de la semana que viene.

Por otro lado, quiero hacer referencia al pedido efectuado por el señor senador Miranda, que tiene relación con dos proyectos que se encuentran en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Uno de ellos está referido al tema de *in dubio pro* operario y el otro tiene relación con un régimen especial del sistema jubilatorio de trabajadores de la UOCRA, que fue votado por unanimidad en dicha comisión hoy por la mañana. Y creo que ya están incorporados en el temario del orden del día, porque habíamos hablado al respecto con el secretario parlamentario, por lo cual cuando llegue el momento los trataremos, según el orden establecido por la Secretaría Parlamentaria.

que haya utilizado en el sentido de que solamente los integrantes de la comisión saben acerca de las cuestiones que se tratan en el Senado.

Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate.

9

O.D. 1.205/08: PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar los **órdenes del día que contienen proyectos de ley**. En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría aclara –ya lo deben haber visto los señores senadores– que se le efectuaron algunas correcciones al orden del día –constan en las fotocopias que obran en las bancas de los senadores–, que fueron acordadas por los integrantes de las diversas comisiones durante el mediodía de hoy. Por lo tanto, lo que está en consideración es el Orden del Día N° 1.205 con las modificaciones a las que acabo de hacer referencia.

10

RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que se retire del plan de labor el proyecto vinculado con el tema de la ganancia mínima presunta –el cual contaba con dictamen– y que su tratamiento sea postergado hasta la semana que viene.

Sr. Presidente. – En consideración el pedido formulado por el señor senador Pichetto en el sentido de retirar el asunto que ha mencionado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

11

O.D. 1.205/08: PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (Continuación)

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente, señoras senadoras, señores senadores: la verdad es que este es un momento muy importante. Poder tratar hoy este dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, y de Salud y Deporte no es un tema menor. La verdad es que mientras trabajaba con nuestros equipos de asesores, con compañeros y no compañeros en la elaboración de este dictamen y en los fundamentos, pensaba y recordaba cuántas caras; cuántas situaciones trágicas; cuántos nombres y apellidos; cuántas situaciones debimos compartir con tantas otras mujeres, niñas o adolescentes durante tantos años sin poder tener al alcance de la mano los elementos o las herramientas para llegar a la resolución de los conflictos que la violencia genera.

Este no es un tema menor, aunque muchas veces produce sonrisas. Este es un tema muy serio.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan Carlos Romero.

Sra. Gallego. – La verdad es que las mujeres argentinas, a lo largo de nuestra historia reciente, hemos venido haciendo importantes esfuerzos, abriendo pequeñas hendiduras para poder transparentar y mostrar la violencia a la que las mujeres somos sometidas en nuestra sociedad.

Esto empezó a cambiar en 1994, cuando se dicta la primera ley de violencia doméstica; pero

a pesar del tiempo transcurrido –hoy estamos en 2008–, cada vez que aparece uno de estos temas en los diarios, tenemos que leer que “no es un problema doméstico de violencia contra las mujeres” sino “un conflicto pasional”. Esto es parte de las justificaciones.

A partir de 1993, cuando las Naciones Unidas define qué es la violencia de género –concepto bastante más amplio que el de violencia doméstica–, empezamos a producir cambios importantes. En 1994, la Organización de Estados Americanos convoca a Belém do Pará y aparece la convención para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, prevenir dicha violencia y sancionarla.

Esta convención, que, además tiene un consejo de expertas y de expertos para monitorear el avance de los países de América Latina y del Caribe, a efectos de ver avances y retrocesos –porque este es un camino de avances y retrocesos–, elaboró en junio de este año sus últimas recomendaciones, las que hemos incorporado en este dictamen que hoy estamos tratando.

Señor presidente: quiero decir también que el Congreso de la Nación Argentina no ha sido indiferente a este tema. De hecho, en los últimos años, hemos votado –y hoy son leyes– una serie de herramientas. Por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Educación Sexual, la de trata de personas y la Ley sobre Lenguaje Sexista, que votamos hace poco tiempo, así como también la Ley de Parto Humanizado. Y también hicimos un importante esfuerzo para tratar de incorporar en algunas leyes, como fue el caso de la nueva ley de educación, el concepto y la mirada del género y de la violencia contra las mujeres. Pero, sin duda, todo lo que hemos hecho –y que tiene un mérito importante– no ha sido suficiente. Creo que la muestra de que no ha sido suficiente ha sido el informe que presentó el martes Amnistía Internacional: “Muy tarde, muy poco. Mujeres desprotegidas ante la violencia de género en la Argentina”. De alguna manera, los medios lo tradujeron duramente, poniendo blanco sobre negro y diciendo que solamente de tomar y sumar las muertes que aparecen publicadas en los diarios en la Argentina murieron en lo que va del año 240 mujeres y que en la provincia de Buenos Aires, durante el año pasado, se radicaron 52 mil denuncias de violencia contra

las mujeres, lo que significa un 266 por ciento más que hace apenas dos años. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se denunciaron 4.419 casos, lo que implica un 117 por ciento más respecto de 2005. Cabe aclarar que estos son solamente los hechos denunciados. Pues bien, pensemos por un momento lo que está por debajo, lo que no se ha denunciado.

La iniciativa que hoy vamos a votar engloba a once proyectos de ley que tenían estado parlamentario: algunos de ellos fueron presentados por senadores con mandato vigente y otros por senadores con mandato cumplido. Entre otros, hay proyectos presentados por los senadores Giri, Maza, Perceval, Viudes, Morales, Bar –mandato cumplido–, Basualdo y una iniciativa de quien les está hablando.

En verdad, quiero ser sincera con ustedes: hemos trabajado tratando de ser lo menos egoístas posible, tratando de despejar las cuestiones personales y partidarias y todas las diferencias que tenemos y buscando encontrar los puntos en común y aquellas cosas que nos entrelazan e igualan. Hoy, a un día de haberse conmemorado el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, podemos traer a este recinto un dictamen sobre el que estuvimos trabajando hasta último momento; inclusive, hasta hoy al mediodía. Justamente, en el día de hoy, en un esfuerzo por superar esas diferencias, volvimos a reunirnos para introducir modificaciones con el objeto de tratar de llegar a un dictamen que englobe a todos y muestre la decisión política de que los senadores y las senadoras estamos realmente preocupados por la violencia, que no es un problema de dos sino de la sociedad en su conjunto.

Antes de abordar el texto del proyecto de ley, quiero agregar un reconocimiento muy particular. Me refiero a los equipos técnicos de los señores senadores que, más allá de defender el proyecto de su senador, tuvieron la comprensión de entender que había un tema que nos superaba. Dedicaron horas y horas en lugares incómodos, no bien refrigerados y, en muchos momentos, hasta sin tomar nada. No obstante, pusieron mucha voluntad a fin de allanar el camino para que los senadores pudiéramos hilvanar el dictamen en tratamiento.

Además, quiero agregar mi agradecimiento, y creo que el de todos los senadores, a algunos

expertos internacionales que enriquecieron nuestro conocimiento y aportes personales.

Agradezco a la doctora Susana Chiarotti, representante argentina ante el Comité de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, a Mabel Bianco, a Susana Sanz, al Consejo Nacional de la Mujer a través de su presidenta, la compañera Lidia Mondelo, a Ethel Díaz, en nombre de la Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas y a otros múltiples colaboradores, que no tengo identificados en este momento pero que fueron muy valiosos al momento de concretar el presente dictamen.

Quiero decir, señor presidente, que el proyecto en consideración se enlaza en lo que es una verdadera política de derechos humanos.

La violencia no solamente es una relación conflictiva de dos personas. La violencia contra las mujeres, que se desarrolla en distintos ámbitos, tiene que ver con los derechos humanos.

Nuestro gobierno ha hecho de la política de derechos humanos una verdadera política de Estado; a veces, logrando consensos unánimes y, en otras ocasiones, siendo duramente criticado.

El proyecto de ley en consideración se inscribe en una política de Estado de derechos humanos porque intenta poner en la superficie que se visualice la violencia contra las mujeres.

Quiero comenzar a desarrollar el tema y, como el texto del proyecto es muy largo, me voy a permitir leer, contando con el perdón de los colegas, a efectos de no perderme en los tramos más importantes de la norma.

Este proyecto de ley trata sobre los derechos humanos de las mujeres, aunque es necesario aclarar que la normativa es una propuesta que va más allá y tiende a consolidar procesos no solamente de derechos humanos sino también de democratización de nuestras comunidades.

Por eso, si bien las mujeres son las beneficiarias directas y protagónicas en esta propuesta, en realidad, reconocemos que será una ley para el conjunto de la sociedad.

Apunta estratégicamente en su artículo 2º, inciso e), a remover los patrones socioculturales en los cuales se sostiene la desigualdad entre los géneros y la relación de poder sobre las mujeres.

Muchas veces nos preguntamos por qué miles de seres son sometidos a la tortura, son

asesinados, ante la apatía y la indiferencia del resto de los miembros de la comunidad. Qué pasa en una comunidad que no defiende este tipo de situaciones y que, cuando lo hace, lo hace espasmódicamente, ante un hecho puntual, pero que permanece impávida frente a cientos de miles de hechos que vemos cotidianamente, en la vida de todos los días, y que somos incapaces de modificar desde nuestras propias conductas.

La violencia es el síntoma de una sociedad, de un sistema social, de su historia y de su cultura, que pasan por un momento de una crisis impresionante. Una crisis que está basada en el desprecio y el desconocimiento del derecho humano del otro. Tiene una base ideológica y es el enfoque de género.

En el proyecto de ley, intentamos brindar elementos para transformar las relaciones entre varones y mujeres con miras a lograr modificar las conductas.

Sabemos que la violencia es un proceso complejo que se construye, fundamentalmente, en la trama de los valores culturales, y que no distingue clases sociales.

Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, hay una tendencia a relacionarlo solamente con la violencia doméstica. Y la realidad es que, cuando miramos las organizaciones laborales, vemos que existe, en infinidad de casos, violencia laboral. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece la violencia laboral? En realidad, hay maltrato laboral. ¿Qué significa esto? El maltrato laboral significa, ni más ni menos, que romper el contrato, ese trato por el cual un empleador o una institución requiere el aporte de un trabajador o trabajadora desde su propio trabajo. Y cuando hay violencia laboral, lo que se destruye es la relación laboral, se perjudica no solamente a la trabajadora, sino que también se perjudica a la institución o a la empresa donde ésta se desarrolla.

Podríamos seguir enumerando, en este sentido, una serie de situaciones de violencia, según el ámbito al que queramos referirnos. Podríamos referirnos a la violencia en la calle, en la educación, en las instituciones del Estado, etcétera.

La verdad, señor presidente, es que hemos decidido en las comisiones, tratar este proyecto de ley como un proyecto de orden público. Porque, según lo que dice Borda, las leyes de orden

público tienen carácter imperativo. Y hemos decidido que esta ley sea imperativa.

Esta ley tiene desagregado el título de los objetivos, en el que especificamos los derechos protegidos. Además, define la violencia contra las mujeres, describe los tipos y las modalidades en forma analítica para aportar una perfecta visualización de los mismos cumpliendo, fundamentalmente, con el mandato de la Convención de Belém do Pará.

Las políticas públicas que define esta ley se desarrollan en el título II. Al respecto, debemos decir que desde hace varios años, muchos años, se vienen ejecutando políticas públicas tratando de erradicar la violencia, pero sin duda esas políticas públicas no han alcanzado, han sido absolutamente insuficientes.

Por ello, esta ley propone la creación y los lineamientos generales de un plan de acción nacional, recogiendo también el contenido de las recomendaciones del Comité de Expertos y Expertas de Belém do Pará.

El organismo competente para generar el diseño de este plan de acción es el Consejo Nacional de la Mujer, que deberá hacerlo a través de la elaboración, implementación y monitoreo de dicho plan.

Este plan, debemos aclarar, compromete a todos los poderes del Estado, instalando una centralidad en la problemática de la agenda gubernamental y social.

Muchas de las medidas que se tomarán tienen como base las experiencias nacionales de algunas provincias, de algunos organismos y también internacionales, así como también otras experiencias e iniciativas legislativas de países de América Latina.

Propone un artículo con principios rectores que colocan en el logro de la igualdad y la no discriminación la forma de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Remarca la necesidad de generar políticas con sentido de transversalidad, que se impulsan en la necesidad de invertir recursos desde el Estado, con la garantía de una atención integral y oportuna de quienes padecen y a quienes la ejercen, así como también a la responsabilidad no sólo del Estado sino también el compromiso de distintos sectores de la sociedad.

El comité en el informe hemisférico con relación a la sección del presupuesto nacional dice que la inversión en los países de la región es mínima. También dice que el apoyo económico que asignan los Estados a los diferentes programas y servicios referidos a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres son insuficientes. Por lo tanto, debemos trabajar y para eso hemos incluido el artículo 43, en el que planteamos la necesaria generación de las partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley.

En el capítulo I del título III se consignan una serie de derechos y garantías mínimos que se deben respetar en los procesos judiciales y administrativos referidos al tema de la violencia, fundamentándose en los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en todos aquellos tratados internacionales de los que la Argentina es parte.

En el artículo 17 se establece como novedad una instancia administrativa optativa previa o posterior a la judicial. Con el objeto de permitir el acceso al cumplimiento de esta ley hemos tenido en cuenta —por eso lo planteamos previamente o con posterioridad a la acción judicial— las distancias que existen en el interior respecto de los centros judiciales.

En cuanto a la instancia administrativa, queda claro que de ninguna manera invalida o reemplaza la instancia judicial; muy por el contrario, su existencia debe servir para hacer operativo el texto legal que se propone en este proyecto, respetando así las recomendaciones del Comité de Expertos.

En el capítulo II, del título III, se establece en el artículo 19 que las jurisdicciones locales en el ámbito de sus competencias dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen previsto en este capítulo. Se consigna asimismo que dicho procedimiento siempre será gratuito y sumarísimo. En el artículo 21 se dispone que varias instituciones sean las encargadas de receptor las denuncias de violencia contra las mujeres con el objeto de evitar demoras, promover mayor eficacia y apoyar a quienes las padecen.

Respecto de la competencia, entendemos que es importante que se comprometan los fueros correspondientes al ámbito donde se produce la violencia contra las mujeres, sea este civil,

penal, contencioso administrativo, federal, laboral o de familia.

El proyecto de ley determina, en el artículo 23, un mecanismo para el caso –que por otro lado es el más común– en que al concurrir al servicio policial se labre una exposición. Todos sabemos que la exposición ha sido el camino de entretenimiento en cientos de situaciones que terminaron muchas veces en circunstancias trágicas. Al respecto, el proyecto plantea que si se presume que existe violencia contra una mujer, se deberá remitir dentro de las 24 horas a la autoridad judicial que corresponda.

El proyecto también recoge la figura de la asistencia protectora, que tomamos de la ley de mi provincia por haber reconocido que, en la práctica, es muy importante para aquella mujer que ha sido violentada o golpeada tener una persona de su confianza que la ayude y la anime en la presentación de la denuncia y del reclamo de ayuda.

En el artículo 28 se desarrollan las características que debe tener la audiencia, que deberá tomar personalmente el juez o la jueza escuchando a las partes por separado. También determina que bajo ningún punto de vista se podrá aceptar el mecanismo de mediación y conciliación. En este sentido, hemos tenido algunas inquietudes y objeciones. En realidad, debemos decir que los acuerdos internacionales plantean que tanto la mediación como la conciliación son improcedentes para este tipo de situaciones porque nadie desconoce que cuando existe un hecho de violencia, la víctima está en una situación de desventaja e imposibilitada de hacer valer sus derechos mediante un mecanismo como este que la pone, nuevamente, a expensas de quien inflige la violencia.

En el artículo 34 se dispone la necesidad del seguimiento porque consideramos que por la índole y complejidad del tema, por ser la violencia contra la mujer una conducta aprendida y culturalmente aceptada durante mucho tiempo, sino hay seguimiento va a ser absolutamente imposible su erradicación.

Y este es uno de los objetivos del proyecto de ley.

En el artículo 35, se da cuenta de la reparación del hecho violento; en el artículo 37, se plantea la necesidad de realizar registros

sociodemográficos; y en el artículo 38, se abre la participación a las organizaciones públicas o privadas comprometidas con los derechos de las mujeres, y allí se da cabida a una figura...

Sr. Presidente (Romero). – Perdón, señora senadora. Ha agotado el tiempo disponible.

Sra. Gallego. – Soy miembro informante, señor presidente.

Sr. Presidente (Romero). – Sí, y ya ha agotado su tiempo de exposición.

Sra. Gallego. – Ya termino.

Como decía, allí se da cabida a la figura del *amicus curiae*, que se trata de presentaciones que se pueden realizar a pedido de un juez o en forma espontánea por personas ajenas al litigio pero que tienen un justificado interés en la resolución final.

Señores senadores y señoras senadoras: quiero finalizar mi exposición diciendo que las mujeres pretendemos que este proyecto se convierta en ley. En realidad, buscamos parcelas en donde se pueda filtrar verdaderamente la libertad. Es una simple pretensión. Desde aquí, esperamos promover el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Sabemos que la sanción de esta iniciativa no resuelve la totalidad de los problemas ni la violencia. Pero estamos convencidas de que en el compromiso adoptado por cada una de nosotras y en nuestra capacidad para difundirla, promoverla, darla a conocer y hacerla visible radica la única garantía de que podamos modificar conductas y resolver este flagelo de la sociedad. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador Morales, por Jujuy.

Sr. Morales. – Señor presidente: como miembro informante, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y como representante del bloque de la Unión Cívica Radical, quiero hacer un breve análisis de cómo llegamos hasta acá con algunas cuestiones que se vinculan con un debate cultural en nuestra sociedad.

En primer lugar, quiero decir que es muy positivo que podamos considerar este proyecto de ley justamente este año, en el que cumplimos 25 años de democracia. Es una buena oportunidad para que reflexionemos acerca de cómo estamos posicionados en materia de derechos.

En realidad, si no se hubiera recuperado la democracia en 1983, si no se hubiera planteado

la primera batalla para resolver la situación de los derechos humanos, si no se hubieran llevado a juicio a las juntas militares ante tribunales integrados por civiles y garantizándoles su derecho de defensa —cosa que no sucedió con los treinta mil compañeros desaparecidos—, no habríamos puesto la piedra fundamental para la discusión de otras cuestiones. En efecto, de no ser por esta vigencia del sistema de derecho, tampoco habríamos podido generar un debate cultural en estos 25 años —más allá de las deudas pendientes—, lo que nos habría impedido debatir o incorporar algunos cambios y sancionar algunas leyes que se han considerado en este tiempo.

No habríamos podido reformar la Constitución en 1994 y establecer el artículo 75 y, particularmente, dotar de rango constitucional a una serie de convenios internacionales que se firmaron con países miembros de las Naciones Unidas; entre ellos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer. Tampoco habríamos podido debatir y sancionar la ley que ha hecho propia y ha establecido como derecho positivo la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No habríamos podido incorporar tampoco, en la reforma de 1994, los derechos de las comunidades indígenas, particularmente el derecho no ya a la comunidad privada, sino comunitaria, o sea, a las tierras. Tampoco habríamos podido sancionar la Ley del Divorcio Vincular y la Ley de Patria Potestad Compartida; ni salir de la lógica de la confrontación permanente con países vecinos y disponernos a establecer la paz con Chile, por ejemplo; ni a marcar para los países de la región en manos de opciones militares el ejemplo de la Conadep o el procedimiento que llevamos a cabo para resolver la cuestión central que nos permite hoy gozar en democracia de este sistema de vida y de convivencia.

Tampoco habríamos podido trabajar desde distintas fuerzas políticas en esta batalla cultural que tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos y, particularmente, lo relativo a los derechos de la mujer y a sus derechos humanos.

Del mismo modo, no habríamos podido aprobar el Protocolo de la CEDAW, bastante debatido el año pasado. Si bien ya estaba aprobada la convención, el protocolo dio para mucho en muchas provincias, porque el tema es

que cuando empezamos a disponer de normas positivas y operativas para cumplir con estas convenciones internacionales, se generó mucho ruido: con el Protocolo de la CEDAW y en algunos pocos casos relacionados con el tema que nos ocupa, dado que, prácticamente, hubo unanimidad, salvo en algunas observaciones que creo se harán.

Llegamos así a un consenso con relación al texto de este proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como concretamente planteó la Convención de Belém do Pará.

Esta es una materia pendiente; es una deuda del Estado argentino. Porque si bien la Convención es de 1994 y fue confirmada a través de la ley 24.632, en 1996, han transcurrido 12 años y recién ahora venimos a aprobar una norma tendiente a hacer efectivos todos los lineamientos de la Convención de Belém do Pará para que tengamos políticas activas con el objeto de garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres.

Así que, en este contexto, venimos a debatir este proyecto, en el marco del cumplimiento de los 25 años de democracia y para seguir dando una batalla cultural que tenemos que seguir dando; porque ni siquiera la sanción de esta ley va a resolver, por sí sola, los problemas de nuestra sociedad argentina respecto de la violación de los derechos de las mujeres. Nos ocurrió con la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual todavía está en proceso de implementación, que va a llevar su tiempo; al igual que también ocurrió con los cien años de la Ley Agote, con la posibilidad de este viraje cultural para que se haga efectivo este cambio de paradigmas nos va a llevar algún tiempo. Seguramente, en este tema también tendremos la misma situación. Pero es importante que aprobemos este proyecto de ley y que definamos no solamente las cuestiones que aquí se plantean, sino que esta norma brinde una respuesta a las recomendaciones del equipo de expertos y expertas que en 2005 y 2007 llevaron a cabo un control acerca de cómo estamos en la región en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de Belém do Pará.

Las cuatro líneas generales de Belém do Pará son las que claramente están expresadas en este proyecto de ley: el marco jurídico; los

planes nacionales y las medidas sociales; el acceso a la Justicia, y el tema del presupuesto y las estadísticas. Me parece que el debate de este proyecto permitió que analizáramos cómo estamos. Y me parece que ésta puede ser una buena oportunidad para que tengamos un diseño de política nacional y federal, porque también el proyecto que se está planteando atiende la realidades provinciales, pero trata de dar un marco para que tengamos políticas nacionales, respetando las particularidades de las distintas jurisdicciones.

Por lo tanto, a través de este proyecto de ley, comenzamos el diseño de algunas cuestiones, pues también hubo un debate y, tal vez, se mezclaron legislaciones vigentes vinculadas con la tipificación de ciertos abusos o de violaciones de derechos en materia penal que era necesario establecer como tipos de conductas a ser rechazadas o reprimidas.

En el capítulo I, cuando establecemos la tipología, no se da una superposición normativa, porque el Código Penal establece las violaciones de derechos y el marco de imputabilidad penal correspondiente. Pero en este caso, se trata de establecer los tipos a efectos de la determinación de los procedimientos de garantía de derechos en sede administrativa, de la vigencia de políticas públicas activas concretas por parte del Estado y, también, de cómo viabilizamos el acceso a la Justicia. Considero que esas son las claves centrales del proyecto en tratamiento.

Ha habido algún debate sobre las cuestiones de la modalidad respecto de las cuales, en el detalle taxativo, tal vez, nos hayamos quedado cortos; pero la reglamentación, seguramente, permitirá la ampliación en cuanto a algunas situaciones que deban ser tenidas en cuenta. En ese sentido, creo que el texto del proyecto es bastante amplio para permitir, sobre la base de la experiencia, la incorporación de antecedentes o de acciones que tengan que ser rechazados o, en todo caso, puestos en caja o tutelados por parte del Estado para garantizar la vigencia de los derechos de la mujer.

Asimismo, hay dos o tres temas en función de las recomendaciones de Belém do Pará que están claramente establecidos. Se trata de cambios centrales al texto de la ley de violencia familiar, la cual –diría– es el género, y ésta sería

la especie, la especificidad sobre la violación de derechos de la mujer.

Tal como se expresó en cuanto a la violencia, respecto del año pasado se duplicaron –o tal vez más que duplicaron– los casos de víctimas fatales en virtud del ejercicio de violencia contra la mujer. Hay 171 casos de víctimas fatales concretas este año, que llegan a 240 si se tienen en cuenta a otras personas o nexos familiares relacionados con esas situaciones de violencia. Se trata de una espiral creciente que debe tener una respuesta a través de políticas públicas activas por parte del Estado.

Además de la definición de un organismo competente como articulador de todas las políticas, hay que determinar las responsabilidades que deben tener las diversas áreas del Estado como, por ejemplo, la Jefatura de Gabinete de Ministros. Porque también tuvimos que incorporar cuestiones relacionadas con la violencia laboral que habíamos analizado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Eso también será el género, ya que deberemos contar con una ley de laboral. Pero las materias de violencia laboral que puntualmente tienen que ver con acciones directamente en contra de la mujer están previstas en este proyecto, y hay facultades directas y concretas sobre la Jefatura de Gabinete.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también tendrá una tarea central de coordinación en el accionar con el organismo de aplicación o la autoridad competente, al igual que el Ministerio de Educación. Y se especifican concretamente las acciones; los programas de difusión, de capacitación y de prevención, y el accionar preventivo que debe tener el Estado en materia de política pública activa a través de los ministerios de Salud y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Asimismo, se contempla la cuestión de las estadísticas y de la información –tema respecto del cual estamos mal– a efectos de determinar, eventualmente, mapas de violencia, porque hay una gran falta de coordinación. No contamos con un sistema ordenado de obtención de información que nos permita afinar la política pública activa. Por lo tanto, respecto de este punto, se definió concretamente que hay que coordinar hasta con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de registros e indicadores que integren a ambos poderes,

independientemente de los que defina cada uno con fines propios, articulándolos con el espíritu de esta ley; generar estándares mínimos de detección precoz y abordaje de situaciones de violencia, entre otros temas; desarrollar, promover y coordinar, también en las distintas áreas, los criterios para selección de datos, clasificación de información y de modalidad que permitan determinar indicadores básicos para los casos de violencias, a efectos de detectar estos casos, para que se apliquen las políticas activas.

También hay un tema que nos parece importante y que va en línea con esa recomendación de Belém do Pará, que tiene que ver con los lineamientos básicos para las políticas estatales, especialmente, el fortalecimiento técnico de las jurisdicciones en cuanto a campañas de educación y capacitación. Es decir que para las mujeres que son sujeto de acciones de violencia, no exista solamente el refugio como única política activa por parte del Estado, porque, en definitiva, terminamos metiendo el problema bajo la alfombra. El refugio es la última instancia. Primero, se plantean campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad, para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres; después, planteamos unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención, que trabaja en la prevención y asistencia. Es decir, se establece una “gradualidad”, y estamos hablando de respuestas múltiples; concretamente, de asistencia directa frente a los casos de violencia. Me refiero a la asistencia interdisciplinaria para evaluar, diagnosticar y definir las estrategias a abordar; a grupos de ayuda mutua; a asistencia y patrocinio jurídico gratuito. O sea, cuestiones operativas básicas.

No es posible garantizar el objeto de la ley que tiene que ver con prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer si no resolvemos cuestiones prácticas sobre la base de políticas activas que lleguen a resolver estos problemas.

También, se prevé atención coordinada con áreas sociales, con áreas de salud. No se trata de poner un médico, asistentes sociales y equipos interdisciplinarios en la autoridad de aplicación. Sí la autoridad de aplicación va a tener la responsabilidad de la ejecución de la política, pero a través de la coordinación con todas las áreas.

Asimismo, se establecen programas de asistencia económica, campañas de comunicación, centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer, un programa de reeducación destinado a hombres que ejercen violencia. Es decir, se trata de distintas medidas que realmente establecen una “gradualidad” y que importan múltiples respuestas para los casos de violencia.

Como decía la miembro informante, senadora Gallego, salimos de la lógica de ley 24.417 en cuanto prevé en uno de sus puntos el tema de resolver estas situaciones a través de la mediación. Impedir la mediación y establecer una serie de acciones anteriores que fortalecen las cuestiones resueltas por las medidas cautelares nos parece que son medidas tendientes a resolver estas cuestiones, efectivamente, en cuanto al vínculo con el Poder Judicial.

Señor presidente: en suma, estamos hablando de un proyecto de ley que no sé si viene tarde, pero los cambios culturales son así. Hay que trabajarlos decididamente, y nosotros hace años que debíamos dar tratamiento a un proyecto de ley como el que estamos abordando. No es sólo el tema de las mujeres. Esto lo planteamos con una gran convicción y una gran decisión.

Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, viene luchando por los derechos humanos y, particularmente, por los derechos de la mujer, de los niños y de las comunidades indígenas, a partir de que la vigencia del Estado de derecho nos permite esta lucha.

Claramente, se establece acá que no va a haber incompatibilidad con la ley 24.417 –que queda como marco general bastante precario– y establecemos un marco específico que puede permitirnos una herramienta para garantizar los derechos de la mujer. Así se establecen previsiones presupuestarias y, entre las normas de procedimiento, se determina la posibilidad de que los estados provinciales adhieran. En ese sentido, sería muy bueno que se hiciera una campaña para que los estados provinciales adhieran a esta ley; de cualquier manera, hay algunos estados provinciales que ya tienen políticas públicas activas y legislaciones al respecto.

Viene bien recordar que la ley federal de educación produjo una gran fragmentación y, en definitiva, nos hizo perder un proyecto educativo nacional, por lo que también sería bueno que recuperemos un proyecto nacional

en cuanto al cumplimiento de las normas de Belém do Pará. Esta recomendación y este trabajo que van a tener que hacerse día a día, y lo van a tener que desarrollar desde el Poder Ejecutivo quienes tengan a cargo la ejecución de este proyecto de ley.

Así que con estos fundamentos, venimos desde la Unión Cívica Radical y desde la Comisión de Trabajo –por unanimidad– a dar una respuesta, tal vez tardía, a esta deuda del Estado argentino para con los derechos de las mujeres en términos de derechos humanos, con el objeto de aprobar este proyecto de ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Forstmann. – Señor presidente: la senadora Gallego y el senador Morales ya han hecho un buen análisis de este proyecto de ley. Así que me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre el género y cómo nos ven y cómo nos vemos, y acerca de por qué recién hoy el Senado de la Nación está hablando de una ley de violencia contra la mujer.

Lo primero que tenemos que decir es que hay discriminación en la sociedad argentina.

En segundo lugar, debemos señalar que esa discriminación surge por una subvaloración de la mujer, por pautas culturales heredadas. A la vez, esa subvaloración tiene que ver con un efecto inmediato, cual es la invisibilidad. O sea, no se nos ve, no se ven nuestros problemas, no se ven nuestros conflictos, no se ve la violencia generada contra la mujer o lo que es peor: la violencia contra la mujer, ya sea intrafamiliar o laboral, pasa a ser algo percibido como casi lógico o normal.

Hace dos años, era representante del Conosur ante la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y me nombraron relatora sobre el seguimiento de la CEDAW. Se podría decir que esta convención es la norma base de los derechos humanos de las mujeres. Y lo primero que tuve que informar fue que de los 35 países americanos, 34 ratificaron la convención y uno no lo hizo:

Estados Unidos no la ratificó. Pero de esos 34 países que ratificaron la convención, sólo 18 ratificaron el protocolo facultativo. Y si estamos

hablando de derechos de la mujer, sabemos que el protocolo facultativo es lo que le faltaba a la CEDAW para ser operativa: si no se ratifica ese protocolo, la CEDAW es una muy buena demostración de enunciación de necesidades a tener en cuenta. Un Estado solamente se hace cargo de aplicar la CEDAW cuando ratifica el protocolo. Por cierto, la Argentina lo ha ratificado y, en tal sentido, felicito a todas las organizaciones de mujeres, al Estado nacional por su decisión y a todas las legisladoras que en su momento pelearon por la ratificación de ese protocolo facultativo. Porque es la única forma de decir que queremos más democracia, y la queremos a través de la creación de mecanismos de participación ciudadana de las mujeres.

La senadora Gallego y el senador Morales ya enunciaron varias normas que se vinculan tanto a la CEDAW como a Belém Do Pará. Hablaron también de la reforma de la Constitución Nacional. Pero a mí me gustaría agregar dos o tres cosas que no se nombraron. Por ejemplo, la ley 24.476, de jubilación sin aportes, o la ley 25.994, de jubilación anticipada. ¿Y por qué las nombro? Porque casi el 90 por ciento de las beneficiarias fueron mujeres.

Algo para rescatar en la enunciación de leyes que fueron pasos previos a la norma que se sancionará en el día de hoy es la Ley de Educación Técnica y Profesional, porque incluye artículos específicos tendientes a la inserción de las jóvenes en dichos estudios.

Por cierto, también me parece importante rescatar fuertemente lo que está haciendo el Consejo Nacional de la Mujer a través del Programa Mujer, Equidad y Trabajo y a través del fortalecimiento del área Mujer Provincial. Creo que es importante reconocer lo que se hace, y así como decimos que hay discriminación, también, hay que decir que muchas personas trabajan fuertemente para que no la haya. En ese sentido, debemos hacer mención también del Plan Nacional contra la Discriminación, que forma parte de una política de Estado que se lleva adelante.

Señor presidente: quiero rescatar, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la creación del Consejo de Políticas de Género, algo impensado en un tiempo atrás dentro de un área que fue siempre ajena a la visión de género. Quiero recordar el Centro de Fortalecimiento Integral

de la Mujer dentro de lo que hizo como aporte el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Quiero tener presente también a la Corte Suprema de Justicia, porque no hace mucho tiempo, fue un sector bastante esquivo a los temas de género. Y en ese sentido, destaco la creación de la Oficina para Casos de Violencia Doméstica. Queremos más, pero todo esto es un buen paso.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fortaleció la Comisión Tripartita para la Igualdad del Trato y Oportunidades en el Mundo Laboral, que tiene actuación en el ámbito nacional y, a la vez, promueve la creación de comisiones tripartitas provinciales.

Quiero recordar en este recinto el Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy”, creado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en julio de 2006 a fin de aportar herramientas con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y a los sectores estatales sobre esta temática.

Hay un proyecto que debe sancionar el Senado, cuya autora es la senadora Perceval y que se encuentra en trámite. Me refiero a la creación del Consejo Nacional de la Mujer mediante una ley del Parlamento. Hace falta porque no sabemos cómo será considerado este tema en la Argentina dentro diez, quince o veinte años. ¿Se seguirá pensando que es necesario? Debe ser una institución creada por ley. Reitero que está con trámite parlamentario.

Puedo seguir nombrando muchas cosas más pero, en definitiva, me parece importante rescatar que hay cosas que pasan en todos los países de América del Sur y de las cuales la Argentina no está excluida. Por ejemplo, me refiero a la fragilidad institucional de los organismos del aparato estatal. También, la escasa capacidad de coordinación e incorporación de la dimensión de género en los programas de los distintos ministerios, la discontinuidad de los equipos técnicos, el presupuesto escaso o los conflictos de la gestión pública y las resistencias de carácter ideológico. Todo esto está relacionado con la falta de leyes específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, algo que se puede solucionar hoy.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. Forstmann. —Y muchos de estos puntos son salvados por el proyecto que será sancionado esta tarde. Sin embargo, cada uno de nosotros milita en su partido, sus lugares de trabajo, su casa, su universidad y sus organizaciones no gubernamentales; en fin, en cada ámbito en el que estemos. Ahora bien, vamos al tema de los estereotipos que recién nombré, muy de pasada. Hay un estudio muy bueno según el cual las voces menos escuchadas son —en el orden que menciono— las de los niños, las de las mujeres y las de las personas de tercera edad. Niños y niñas, mujeres y personas de tercera edad; esto es así. ¿Por qué? Por las pautas culturales. Pero ¿quiénes pasan las pautas culturales? Ahí empezamos con algo sobre lo que nosotras, las mujeres, tenemos que hacer una fuerte reflexión.

Gran parte de las pautas culturales las pasamos las mujeres, por ejemplo, cuando educamos a nuestros pibes. En general, si tenemos una hija y un hijo, si necesitamos ayuda, le decimos a la hija: “por qué no hacés la cama de tu hermanito, que está estudiando”; mientras tanto, al varón, en la misma situación, en general, le decimos “andá a comprar pan”. Entonces, tenemos: mujer, ámbito privado; hombre, hacia afuera.

Hablemos de los cuentos infantiles. Desde nuestras bisabuelas venimos contando los mismos: *Cenicienta*, *Blancanieves*, *La bella durmiente*. Brujas o estúpidas; brujas o dependientes del Príncipe Azul que nos viene a salvar la vida.

Vamos a una reunión de cooperadora escolar: dos varones, veinte mujeres. Tenemos que elegir al presidente de la cooperadora. ¿Quién es? Un varón, nunca una presidenta. ¿Qué nos reservamos para nosotras? La Secretaría: trabajamos, hacemos las actas y después, perseguimos al “señor presidente” para que firme esas actas.

Cuando evaluamos las actitudes de hombres y mujeres, al hombre le perdonamos las fallas; a las mujeres, no. Y esto se suma a lo que transmiten los medios masivos de comunicación, donde la mujer es más un objeto que un sujeto. A nosotras, mujeres políticas, cuando un periodista nos entrevista por primera vez, no nos pregunta solamente en qué proyecto estamos trabajando, como lo hacen con un varón. Cuando nos entre-

vistan por primera vez, siempre nos preguntan, además: “¿Cómo concilia la tarea parlamentaria política con su labor como madre y ama de casa?” Es la sociedad que nos está diciendo: “Che, ¿vos no tendrías que estar en tu casa?” Si no intentamos cambiar todos estos preconceptos y pautas culturales en lo cotidiano, las leyes serán más difíciles de aplicar, de defender y, por supuesto, de sancionar.

Costó muchísimo sancionar esta ley. Yo espero que, con nuestra conducta cotidiana, ayudemos a que sea fácil implementarla. Esto lo digo para los veintinueve presentes y para los cuarenta y tres senadores que ahora están ausentes. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: desde hace años, uno de los problemas que más preocupa a la sociedad argentina es la inseguridad. Cada vez que alguna persona sufre un robo, es víctima de actos de crueldad o muere porque es asesinada, hay estupor, bronca, indignación y miedo en nuestra sociedad. Sin embargo, no registramos que cada año mueren más mujeres víctimas de violencia, generalmente en sus hogares, que personas por robos o incidentes en la calle. Las estadísticas muestran que son mayoría las mujeres víctimas de violencia; de actos graves de violencia tales como el asesinato, la violación, la vejación o el abuso.

Las que no los hemos sufrido somos la minoría. Es importante que todos y todas tomemos conciencia de esta circunstancia. A pesar de ello, este problema no está al tope de la preocupación de la sociedad argentina, de allí la importancia de esta ley.

Lamentablemente, no se trata de un fenómeno que se da sólo en la Argentina, sino que es global. Por eso, en 1993, las Naciones Unidas instituyó el 25 de noviembre –precisamente, ayer– como el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Justamente ayer, dio comienzo la conmemoración de esa fecha en los países que adhirieron, en los que se realizará una serie de actividades que van a durar dieciséis días, tendientes a reflexionar sobre este problema.

La violencia contra las mujeres no ha disminuido con nuestro ingreso a distintas áreas de la vida pública. A pesar de los avances legislativos; del avance en la consideración de que la violencia contra la mujer constituye la violación a un derecho humano, las estadísticas no muestran que desciende la violencia contra las mujeres sino todo lo contrario. Esta violencia es tan generalizada como invisible. Y lo paradójal es que, a pesar de estar tan expandida, es igualmente invisible. Todavía es parte de una cultura patriarcal, paternalista –de siglos, de milenios–, que consideraba que las mujeres no teníamos almas; que no teníamos una razón o un cerebro suficientes como para ocuparnos de nosotras mismas. Por ende, no teníamos derechos humanos propios y, en consecuencia, necesitábamos a varones –padres, esposos, hermanos– que cuidaran de nosotras; incluso, que era necesario que nos abusaran o castigaran porque nosotras solas “no podíamos” o “no podemos”. Esa cultura sigue arraigada en las sociedades de todo el mundo y es la que genera esa violencia que hace que el lugar más peligroso para muchas mujeres no sea la calle sino la habitación conyugal.

Les recomiendo a todos los presentes que vean una maravillosa película española llamada *Te regalo mis ojos*, donde la trama muestra a una mujer y a su marido tratando de salir de una situación de violencia en su hogar. Uno puede ver en la película a hombres que concurren a talleres para tratar de modificar esta pauta de violencia. Cuando el psicólogo los lleva a identificar qué genera esos exabruptos, se advierte que no es una cuestión de temperamento o arrebatos pasional. Recordemos que siempre se ha dicho que, como es más fuerte, al hombre “se le va la mano”. De esa forma se ha tratado de catalogar este tipo de actitudes.

Volviendo a la película, allí se ve cómo salen a la superficie situaciones en que el hombre no puede controlar a esa mujer. Entonces, cuando esa mujer tiene deseos de estudiar o de trabajar –o sea, de algo que él no le puede proveer–, esta actitud le provoca una inseguridad tal que lo motiva a someterla, a aplastarla y, en algunos casos, incluso, a matarla. Esa es la matriz, y uso una palabra femenina, porque “matriz” tiene que ver con útero, con gestación.

En definitiva, este paradigma todavía está en la cultura. No solamente está en los varones sino también en las mujeres, que, a veces, creen que por su culpa el hombre tuvo que pegarles; que solas no pueden; que si abandonan esas relaciones de protección no saben lo que les puede ocurrir.

Todavía hay muchísimo por hacer en este tema. Por eso, este proyecto de ley es fundamental, así como este debate que estamos teniendo. Lamento que ahora seamos tan pocos aquí, porque este es un tema importantísimo.

Si nos preocupa la violencia en nuestro país, tenemos que saber que las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas son las mayores víctimas, mucho más que los que lo son por asesinato, secuestro o robo; mucho más que los casos que se publican en los diarios todo el tiempo. La violencia mayor que hay en nuestra sociedad es contra las mujeres y esta violencia es tan generalizada como invisible. Por eso es importantísimo el proyecto que ley que vamos a sancionar hoy. Constituye un paso adelante muy grande, porque nos da una dirección. Es una política de Estado.

Además, como señaló la senadora Gallego, es muy importante que este proyecto de ley haya sido fruto del consenso de muchísimos proyectos que se han presentado durante años. En ese sentido, para que tengamos políticas de Estado, para que cada nuevo gobierno no cambie su actitud en la materia con giros de 180 grados, para que no estemos “en ningún lugar”, este consenso es realmente de suma importancia. Sería muy importante que pudiéramos hacer lo mismo en una política agropecuaria, en una política previsional y en una política energética. De eso se trata cuando queremos construir políticas de Estado. Por eso, quiero celebrar el paso que estamos dando hoy.

También es importante señalar que hoy en día, el Estado argentino y este gobierno –no solamente el de la presidenta Cristina Kirchner sino también el del ex presidente Néstor Kirchner– han hecho muy poco en materia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Esto no lo digo yo sino que lo dijo ayer el director de Amnistía Internacional, que vino al Senado a la Comisión Especial Banca de la Mujer para presentar un informe sobre violencia de género contra las mujeres en

la Argentina. Se trata del seguimiento de otro informe que se presentó hace cuatro años. Al respecto, el señor Rafael Barca dijo que en los últimos cuatro años, no ha habido progresos en la Argentina, que no se han notado progresos en esta materia. Además, ¿qué tipo de asistencia recibe una mujer que recurre a algún organismo oficial, ya sea nacional, provincial o municipal? Textualmente, dijo que “esto es una lotería de código postal”; que no se sabe cómo las van a atender porque no hay protocolos o estándares; que es realmente una lotería el tipo de asistencia que van a recibir.

Cuando venía para aquí, miraba unos carteles –me parece interesante que haya campañas de concientización– en los que se dice a las mujeres: “Animate a denunciar”. La palabra “animate” me pareció que no está a tono con el sufrimiento de una víctima de violencia, de lo que tiene que hacer para animarse a denunciar y a salir de una situación como ésta. En definitiva, no me pareció una expresión muy apropiada. Sin embargo, ayer nos decían los representantes de Amnistía Internacional que muchas víctimas, una vez que se animan y dan el paso, después caen a un precipicio.

Entonces, es importante que sepamos que en los últimos cuatro años no se ha hecho lo suficiente, según este informe que se puede consultar en la página de Amnistía Internacional.

Este representante, también, dijo que habían enviado cartas a la presidenta Cristina Kirchner y a sus ministros para ponerlos al tanto de este informe y para que los distintos ministerios tomaran medidas. Lo cierto es que no recibieron respuesta alguna.

Una recomendación que se hace allí es que para que la eliminación de la violencia de género contra las mujeres sea un hecho real, resulta importante que las autoridades de máxima jerarquía de un país, de una provincia o de una municipalidad sean quienes condenen estos actos o promuevan acciones para erradicarlos de una manera contundente y permanente. Es decir que la mejor campaña es cuando uno ve comprometidas a las máximas jerarquías de los gobiernos, y eso no se ha visto en los últimos años en nuestro país.

También quiero señalar –y no es para ser aguafiestas sino para que no nos quedemos en lo discursivo– que le estamos dando una respon-

sabilidad muy grande el Consejo Nacional de la Mujer. Sin embargo, le asignamos una partida muy magra cuando se sancionó el presupuesto hace poco tiempo: apenas 5 millones de pesos; esto significa una reducción del 17 por ciento. Cabe destacar que el Consejo Nacional de la Mujer depende de la Presidencia de la Nación y que mientras su presupuesto ha decrecido un 17 por ciento, el presupuesto general y el de la Presidencia en particular han aumentado.

También podemos observar la poca importancia que el tema tiene en el organigrama presidencial y en el presupuesto. Digo esto porque mientras el Consejo Nacional de la Mujer tiene un presupuesto de 5 millones de pesos, por ejemplo, la Dirección de Prestaciones Turísticas –dependiente de la Secretaría de Turismo– tiene uno de 47 millones. Repito: 5 contra 47. En el caso de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que es importantísima –y hasta necesitaría un monto mayor–, tiene 24 millones de pesos de presupuesto. Esto, evidentemente, contrasta con el presupuesto de 5 millones de pesos del Consejo Nacional de la Mujer, cuyo objetivo es erradicar y cambiar la cultura de un país.

Otro ejemplo es el de la Dirección Ejecutiva de Difusión y Concientización de Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes, que recibe un presupuesto de casi 12 millones contra sólo los 5 millones que percibe el Consejo Nacional de la Mujer.

En consecuencia, espero que el gobierno tome medidas concretas. Este es un pedido que hago también a la banca del oficialismo y al observatorio previsto en este proyecto de ley, a fin de que podamos ver resultados y cambios concretos no sólo en el presupuesto sino también en la jerarquización del Consejo Nacional de la Mujer, para que ésta sea una proridad del Estado nacional. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. – Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar que era uno de los veintinueve senadores presentes cuando la señora senadora por Santa Cruz dijo que había pocos legisladores en el recinto.

Comparto plenamente el contenido, el objetivo y los fundamentos del proyecto en consideración. Me parece que es un tema primordial, que tiene una importancia social que excede, incluso, los tiempos.

Por otra parte, creo que la violencia implica siempre un proceso de discriminación. En ese sentido, quiero señalar que si uno mira la historia, advierte que la mujer es la gran discriminada en todos los aspectos sociales, especialmente, en los más representativos. En efecto, es discriminada en lo social: siempre miramos situaciones de injusticia social –que las hay muchas– y lo cierto es que el eje central y el objeto principal de esa injusticia está vinculado con la mujer y con los niños. Por lo tanto, siempre ha habido una discriminación en lo social.

También ha habido una discriminación en lo laboral: siempre, por igual trabajo, los salarios han sido mayores para los hombres. Siempre ha habido trabajo para los hombres y no tanto para las mujeres. Esa discriminación tiene un contenido actual que es real, cierto.

También, hay una discriminación a través de los tiempos en lo político. Hace sesenta años, señor presidente, en este país las mujeres no votaban. Tuvo que aparecer Eva Perón con su empuje, con su vitalidad, con su conciencia de género y con su vigor político, para impulsar la ley que en 1947 otorgó el voto a las mujeres.

A través de la historia –y creo que hoy también–, se repite la discriminación de la mujer en lo religioso. En todas las religiones, los elementos fundamentales, los actores principales, son los hombres; las mujeres siempre aparecen en un segundo plano.

Quizá por razones de utilidad, sí hemos respetado a la mujer en su condición de madre y de responsable del cuidado de nuestros hijos.

Por eso, esta norma intenta remediar la situación de discriminación y de desigualdad, que es absolutamente injusta. La naturaleza ha creado diferencias entre el hombre y la mujer, pero nuestra sociedad ha transformado esas diferencias en desigualdades. Y esto no es justo. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos tiempos se ha producido un avance significativo en la conciencia social, tendiente a reconocer la igualdad de género. Por ende, debemos terminar por igualar aptitudes y criterios, y

hacerlos operativos para que tengan que ver con esa finalidad y podamos brindar la respuesta de igualdad que exige la realidad actual.

Los historiadores han dividido nuestra historia conforme los hechos de cada época, en la edad de piedra, la edad del cobre, la edad antigua, la edad moderna, la edad contemporánea. Yo espero que atendiendo a este nivel de conciencia cada vez mayor de la presencia de la mujer en nuestra sociedad, esta época sea calificada como la edad de la dignificación de la mujer.

En ese sentido creo que marcha esta legislación que estamos planteando, y espero que sea aprobada prontamente en la Cámara de Diputados para que podamos contar con esta herramienta legal que haga efectivo el interés que tenemos todos por terminar con esta desigualdad y esta discriminación. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Señor presidente: no creo en lo invisible. La universalidad, el peso y la contundencia del proceso cultural, el disvalor de la mujer como soporte fundamental de nuestra herencia cultural, es una cuestión que se manifiesta cotidianamente. Se manifiesta en el idioma, en la estética, en los arquetipos, en las pautas de consumo y, fundamentalmente, en esa cotidianeidad en la cual, a través del ejemplo en la casa, en el barrio o en la escuela, mi generación ha sido educada.

Simplemente, recuerdo que no es precisamente en esta construcción cuando tributamos a esta cultura occidental, respecto a la cual quiero referirme en cuanto al papel de la mujer. Este es uno de los debates que también en algún momento deberemos darnos en honestidad. Es decir, el papel poco feliz de las grandes religiones monoteístas en torno a la conformación de lo que es el valor de la mujer. Simplemente recuerdo y menciono a Pablo De Tarso; nada más. De ahí, el que quiera leer biblias o evangelios, que lo haga.

El otro aspecto que debo señalar es que, cada vez que el derecho se refirió a la mujer, la tomó en función de dos aspectos, simplemente. El principal de ellos, es el aspecto de los bienes, así como el orden sucesorio de estos. En tal sentido, recordemos hasta hace muy poco tiempo

cómo era la calificación de los delitos contra la honestidad, en la medida en que la honestidad era simplemente el pundonor masculino portado en cabeza de la mujer.

Del mismo modo, debo recordar la diferencia en el adulterio y qué implicaba para el hombre ser adúltero y qué importaba para la mujer. Esto es un sistema de valoración, y fundamentalmente la cotidianeidad, que no lo torna invisible.

Por eso, abrevamos y vivimos precisamente en ese sistema de descalificación como supuesto básico axiológico, y posteriormente con la opción de la violencia en función del desprecio.

Simplemente, en función de la sinceridad de todas estas cuestiones en torno al rol cultural que heredamos, llegará el día en que discutamos un Código Civil donde las tareas domésticas sean compartidas por ley por hombre y mujer. En ese entonces, vamos a ver hasta qué punto estaremos dispuestos a llegar.

He visto un proyecto de mi compañera de bancada, y por eso he efectuado esta simple reflexión. También brindo mi homenaje a la tenacidad de ellas y señalo que no hay ley que pueda confrontar esos parámetros culturales sin un compromiso personal permanente en cabeza de cada uno de nosotros.

Y me referiré al humor como la manera de vulnerar la caballerosidad, de esquivar ese trato caballeroso que debemos dispensarles a nuestras compañeras, mujeres y amigas. Al respecto, destilamos permanentemente esa fina ironía, y un humor que fundamentalmente se edifica –como todo humor– sobre la agresión, la descalificación y la ironía.

Simplemente, solicité hacer uso de la palabra para pedirles disculpas a mis compañeras de bancada y al resto de las senadoras por toda forma de expresión humorística descalificadora en la cual haya incurrido. Y asumo el firme compromiso de acompañar esta iniciativa a través de una corrección fundamental de mi propia conducta, como ejemplo no solo para mis compañeros de bancada sino para los demás senadores. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la consideración de este proyecto se da en una situación de reconocimiento de los derechos, y de avance

en cuanto al progreso social y a la justicia en una sociedad que discriminó largamente.

La primera reflexión que quiero hacer respecto de esta iniciativa que viene a constituirse en una herramienta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es que se trata de un paso altamente positivo y un reconocimiento a la tarea y a la lucha de las propias mujeres.

Muchas veces en el transcurso de la historia, ante la incomprensión de las sociedades se hablaba de sonrisas. En ese sentido, fueron siglos de sonrisas ante las denuncias; siglos de sonrisas ante el avasallamiento; siglos de sonrisas ante la discriminación. Cuatro siglos tiene aquel escrito breve –y dramático– de Shakespeare *La violación de Lucrecia*. A través de dicha obra ya en el siglo XVI Shakespeare expresaba esas relaciones de poder entre el hombre y la mujer; cómo no solamente el hombre podía violar a la mujer. Y al final de la obra aquella mujer –Lucrecia– se suicidaba para defender su honor y el de su pareja, por haber sido violada.

Es decir que esta ha sido una batalla cultural y permanente. Y este proyecto es el primer justo reconocimiento a las mujeres que en minoría y soledad –pero con mucha fuerza– fueron arrancando leyes positivas para defender sus derechos.

Y como lo hice en otras oportunidades, rescataré el efecto positivo de la Ley de Cupo Femenino en la República Argentina. Si el Parlamento, y en particular el Senado dejó de ser la Cámara conservadora, en mucho fue por la constitución de un porcentaje de mujeres que casi se acercó al 50 por ciento. En consecuencia, la Ley de Cupo Femenino deberá avanzar hacia la paridad en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judiciales, porque es evidente que esa participación de la mujer en cada ámbito específico ha sido la que introdujo problemáticas que hubieran tardado muchísimo tiempo más en llegar a los parlamentos, a los departamentos ejecutivos o a la Justicia.

Lo hemos comprobado con las leyes; hemos visto cómo se ha enriquecido la agenda del Parlamento argentino a partir de la participación de la mujer.

Quiero rescatar las convenciones internacionales. Por ejemplo en 1993 la Conferencia

Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos constituyó uno de los documentos internacionales más importantes para las mujeres, porque no solamente reconoció los derechos como parte inalienable, integral, indivisible de los derechos humanos universales, sino también porque reconoce a la violencia contra las mujeres por su condición de género como una violación a sus derechos humanos. Y aquí lo más importante de esta conferencia mundial es que sacó definitivamente la cuestión del ámbito privado y marcando un campo de acción y de exigibilidad del derecho que cada mujer puede reclamar.

Es lo que aquí se planteaba acerca de la invisibilidad y de la necesidad de que estas cuestiones tomen estado público. Lo que muchas veces cuesta es la decisión de hablar, de denunciar, que es muy difícil de tomar por parte de la mujer porque pone mucho en riesgo, porque la mayoría de las veces están involucrados familiares directos y porque esa denuncia genera mucha expectativa, en el sentido de que puede solucionar el problema y que en muchos casos se complica con procesos judiciales que producen demoras o, finalmente, se archiva la causa. Entonces, la mujer queda sin respuesta y vuelve a la situación previa reforzando objetivamente a quien fue su agresor.

Las estadísticas son contundentes en nuestro país. Una de cada cuatro mujeres es víctima de violencia; se cometen noventa violaciones por día en el país. Una mujer por día es captada por una red de trata de personas para explotación sexual. Ya hay alrededor de cuatrocientas mujeres desaparecidas. O sea que estas cifras elocuentes implican lo que es una violación grave y sistemática de los derechos humanos y, por lo tanto, su abordaje debe constituirse en una política de Estado.

Por eso la sanción de este tipo de leyes –que son avances importantes– debe ser acompañada por políticas de Estado que acompañen la ejecución de los derechos.

Los derechos humanos no solamente deben ser planteados, no solamente deben ser reconocidos, sino protegidos explícitamente en la práctica. Y por eso estas políticas de Estado tienen que realizarse en coordinación entre los poderes municipales, provinciales y el Poder Ejecutivo nacional y debe referirse a una eficiencia de la

Justicia que pueda dar un ámbito de aplicación directo a estas leyes que hoy vamos a votar.

Por eso creo que es un día de reconocimiento, de avance positivo, donde el Parlamento argentino reconoce un derecho más. Y las estadísticas de las que recién hablábamos son dolores que quedan, son libertades que faltan, pero es un camino de progreso que estamos transitando con la sanción de este proyecto de ley. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Es para pedir el cierre de la lista de oradores. Esta sesión tiene un temario muy largo y sería bueno fijar una hora para votar este importante proyecto, por lo que sería conveniente que se cierre la lista de oradores porque, si no, se seguirán anotando senadores.

Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de orden...

Sra. Escudero. – ¿Se podría leer antes la lista de oradores?

Sr. Presidente. – Sí, perdón, cómo no.

La lista de oradores es la siguiente: senadores Parrilli, Giri, Riofrio, Rossi y Perceval.

Ahora se incorpora a la lista la señora senadora Negro de Alonso.

Sr. Pichetto. – Que se vote el cierre de la lista de oradores.

Sr. Presidente. – De acuerdo.

Se va a votar la moción de orden de cierre de la lista de oradores.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.

Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. – Yo creo que hoy se está sacando a la luz una problemática que ha sido silenciada durante muchos años. Las mujeres nos hemos atrevido a romper el círculo del silencio y los senadores preopinantes han estado diciendo que es un cambio cultural el que necesitamos para erradicar la violencia contra las mujeres. Y yo creo que efectivamente es así.

Durante muchos años, en nuestro país esta ha sido una lucha sólo de las mujeres. Pero nosotras necesitamos integrar a los hombres a esa lucha, porque en nuestro país la violencia en la familia es, como se dijo, un problema de todos.

En este sentido, es válido recordar lo que pasó en Canadá en el año 1991, cuando catorce mujeres fueron asesinadas por un hombre que no pudo ingresar a una universidad politécnica.

Yo creo que los símbolos y los chistes son muy importantes –como sostuvo el señor senador Fuentes–. Precisamente, Freud decía que los chistes son la manifestación del inconsciente, y cuando esto tiene que ver con la mujer o con el género considero que se están reflejando cosas a través del inconsciente.

Cuando sucedió ese hecho trágico en Canadá fueron los hombres los que adoptaron una actitud activa y se pusieron una cinta blanca, un lazo blanco, para empezar a luchar y denunciar la violencia contra la mujer. Ayer, en la provincia del Neuquén, hicimos una campaña para que los hombres usaran esta cinta blanca y los hombres neuquinos quieren hoy hacer este llamado, en primer lugar, a todos mis compañeros varones del Senado, a quienes les voy a hacer llegar una cintita blanca, con una reflexión al respecto. Creo que poder poner en palabras los sentimientos tiene un gran valor y los símbolos ayudan a que recordemos ciertas cosas. Esta cinta blanca quiere decir que el hombre se integra también a esta lucha que no puede ser solamente de las mujeres, porque para prevenir, sancionar y erradicar la violencia necesitamos que participen todos en forma activa.

El silencio no nos ayuda; debemos pedir esta ayuda. Este proyecto de ley contempla también un amparo psicológico, un tratamiento, también para el varón. Y esto es muy importante para nuestro país.

Por eso, este obsequio y llamado a los hombres que se encuentran en el recinto para que se coloquen la cinta blanca y, de esa forma, nos ayuden a erradicar la violencia. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. – Señor presidente: me siento absolutamente gratificada. Soy una de las autoras de uno de los tantos proyectos de violencia doméstica y violencia laboral que ingresaron en 2004.

Realmente, quiero agradecer especialmente a las mujeres de las comisiones que han tenido que ver con el diseño y la contención de todos los proyectos en una sola propuesta. No voy a

dar nombres, pero reitero mi agradecimiento a los senadores y a los asesores porque ha sido una ingente tarea.

Cuando uno legisla construye herramientas. Y cuando se construyen herramientas que sirven para pelear por la libertad uno se siente doblemente satisfecho.

La violencia siempre es sometimiento. No voy a abundar en los conceptos que se han dicho porque coincido ampliamente con todos. Pero voy a recalcar algunas cosas que aparecen siempre como chispazos en la vida cotidiana.

Todo lo que la sociedad no condena es difícil que salga a la superficie.

Recuerdo que cuando era niña tenía una vecina de mi casa que permanentemente era golpeada por su esposo. Y cuando, a veces, mis padres se inquietaban y se preocupaban y hablaban con ella siempre terminaba con algo así como “me pega porque me quiere”.

Esto también está ligado profundamente en un arquetipo cultural construido y diseñado, como en este ejemplo que acabo de dar, con valores absolutamente falsos, pero que han sido y son utilizados a lo largo del tiempo.

Decir que con la presente norma se van a resolver los problemas sabemos que no es la verdad. Pero avancemos un paso por vez. Y mediante un paso por vez, la humanidad va llegando a aquellos sitios que se propone llegar.

El tema del humor lo iba a tocar porque vengo de una provincia donde el humor es utilizado en casi todos los espacios de la vida cotidiana. Y una provincia donde con el tema del hombre y la mujer se vive permanentemente estigmatizando, se vive constantemente poniendo disvalor en situaciones de risa y carcajadas que nos agravan. Pero el problema no es solamente que el varón cuente cuentos sino que los hagan propios las mismas mujeres. No es solamente un llamado al varón lo que intentamos hacer quienes hemos trabajado profundamente en el tema sino que se trata de un llamado a las personas todas, a los hombres y a las mujeres.

Del silencio se sale hablando. Del dolor se sale buscando solidaridades y esta sociedad tiene la obligación de construir, generar y poner en la mano de todas las víctimas de la violencia una herramienta que le sea lo mejor posible.

Seguramente, no será la que resuelva todo, pero probablemente sí sea la mejor de todas.

Termino contando algo.

Este año visité un barrio de un país del África donde vivían mujeres y niños huérfanos de familias víctimas del sida. Fue terrible. Lo peor fue visitar un lugar que era prácticamente una fortaleza, una cárcel custodiada por guardias de seguridad, porque adentro de ese sitio están alojadas mujeres embarazadas y mujeres con sus hijos, porque la sociedad de ese pueblo cree que al VIH lo contagiamos las mujeres. Miren si hay tela para cortar; miren si hay camino para recorrer y miren si vale la pena todo el esfuerzo que hagamos para ir resolviendo este tipo de situaciones.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Riofrio.

Sra. Riofrio. – Señor presidente: nuestra sociedad, como muchas sociedades latinoamericanas y del mundo, es violenta. Tal vez la violencia contra la mujer es la más extendida, la más arraigada y la menos visible; cuesta percibirla.

Las largas luchas contra esto –que, en realidad, no son tan largas, ni siquiera tienen dos siglos– tienen como base una cosa tan simple como el reconocimiento de los derechos humanos de la mujer, que incluyen los derechos sociales, políticos y económicos. No podemos decir que esta lucha haya sido infructuosa. Hoy, nadie puede negar que las mujeres gozamos nominalmente de los mismos derechos de los que gozan los varones. Y no voy a hacer acá el relato de toda la legislación que nos ampara, porque otras compañeras y compañeros ya lo han hecho. Pero también es verdad –y cuesta reconocerlo– que no ha sido suficiente. Hoy los informes nos demuestran que lejos de disminuir, esta violencia ha aumentado. Pero la contención y la erradicación de la violencia no son arquitectura jurídica, sino que realmente se trata de hacer efectivo, en la práctica, el goce de estos derechos por las mujeres.

También es importante decir que a veces limitamos el concepto de violencia a la violencia física. Realmente, son innumerables las maneras de agredir a la mujer que ha adquirido la sociedad. En esto incluyo a los medios de comunicación. Como mujeres nos sentimos a

diario y en todo momento agredidas en nuestra dignidad. Alguien lo dijo acá: estamos siendo catalogadas como objeto y no como sujeto. Realmente, se han dicho cosas muy interesantes que hacen que pierda de vista lo que había preparado para decir.

La senadora Estenssoro manifestó que las mujeres aquí presentes seguramente no hemos sido víctimas de violencia. Obviamente que no. Y si alguna lo fue, logró romper con el paradigma y el estereotipo. Pero ninguna de nosotras, las mujeres que hemos alcanzado algún lugar, o que hemos trabajado justamente en romper ese estereotipo, puede decir que no ha sentido, de alguna manera, la discriminación y lo difícil que se ponía la tarea por nuestra condición de mujeres, porque algunas cosas que son valoradas en el hombre como virtudes, en nosotras se vuelven defectos.

Recuerdo, cuando en mi provincia luchábamos por la ley de cupo, que una diputada provincial que no pertenecía a mi signo político –debo reconocerlo–, manifestó algo que me pareció realmente interesante: cómo será de profunda la cuestión cultural instalada con respecto a la mujer que cuando hablan de un hombre exitoso, cuando hablan de un hombre que ha alcanzado un lugar importante, que tiene trascendencia, dicen que es un hombre público. Sin embargo, cuando se trata de la mujer no podemos decir lo mismo.

Nosotras tenemos este estigma. Hemos luchado contra él y hoy estamos aquí. O sea, nuestro camino de ninguna manera ha sido infructuoso.

Hoy estamos planteando esta ley porque realmente la sociedad tiene una actitud diferente, porque ya no consiente la violencia, pero también es verdad que en general no lucha contra ella.

Como legisladores estamos haciendo lo que nos corresponde: esto es, dictar una ley que podríamos denominar –humildemente lo digo– de presupuestos mínimos en la lucha contra la violencia y contra la discriminación.

Para terminar –entiendo la cuestión del tiempo que se planteó–, y pidiendo las disculpas del caso por si alguien se siente afectado –nunca es mi estilo confrontar–, quiero señalar, más que un reproche, una autocrítica. Se trata de un pa-

recer personal. Entiendo que la sociedad, desde lo institucional y desde lo formal, comprende la necesidad de esta legislación y de todos los mecanismos destinados a terminar con la iniquidad que produce la violencia contra la mujer, la violencia de género; pero hasta que el tema de los derechos humanos de la mujer no sea también preocupación y ocupación masculina, puesta en evidencia en acciones concretas y no con pasividad permisiva, sin discursos de ocasión, sino militancia comprometida, nuestro mensaje no habrá llegado al corazón de la cultura de la sociedad. Simplemente, será la lucha de las mujeres por las mujeres, y es mi aspiración a que sea una lucha de todos, que dignifique nuestra condición humana, porque la violencia de género no degrada sólo a la mujer que la padece, sino a todas, degrada al género y también la degradación del violento ofende y menoscaba al hombre en su integridad.

Vaya mi homenaje a las luchadoras de antes, del pasado, a las luchadoras de hoy y –así lo espero porque es mi deseo– a los luchadores y luchadoras del futuro porque, sin duda, la lucha será llevada adelante por mucho tiempo, desgraciadamente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente: trataré de ser lo más breve posible.

Yo también quiero sumarme a este día tan particular, un día de reflexión, un día en el que se da un paso adelante, en el que obviamente, más allá de que todo el Senado está tratando la iniciativa, el impulso, el esfuerzo más importante lo han hecho las señoras senadoras. Con este trabajo que hicieron con la colaboración de todas las técnicas y técnicos de cada una de las comisiones nos han dado un ejemplo. Ayer en la reunión de labor parlamentaria surgieron diferencias entre distintos bloques con relación al articulado. Entonces, las senadoras convocaron a una reunión para hoy a las once y media para tratar de zanjar todas estas dificultades, y hoy con semejante amplitud y consenso –es un ejemplo– estamos llegando a una casi unanimidad.

Obviamente, cuando uno ve a las mujeres en las gradas recuerda a las instituciones. La senadora Forstmann dijo algo muy cierto. Muchas veces las instituciones están sostenidas con el

esfuerzo de la mujer y conducidas en su Presidencia por los hombres, lo cual no ocurre sólo en las cooperadoras o instituciones de clase media o media baja, sino que ocurre, lamentablemente, en todos los estratos sociales. La semana pasada había ido a dos congresos de medicina y en el panel –cosa que les hice presente a los organizadores– sólo estaban sentados hombres. Era una foto que chocaba y uno realmente se daba cuenta de que no respondía a lo que tiene que ver con la organización y el esfuerzo de los integrantes.

De cualquier manera, es un paso muy importante hacia adelante. Se trata de un proyecto de ley que nos va a poner a hacer los deberes a todos. Si no, miremos el contenido del proyecto de ley cuando desde la página 7 del dictamen nos involucra a todos: Jefatura de Gabinete, Ministerio de Acción Social, Salud Pública, Trabajo, Justicia y Senado. Todos tenemos que hacer los deberes en este proyecto en el que nos estamos comprometiendo.

Agradezco profundamente el gesto de la senadora Parrilli; lo uso orgulloso y comprometido porque, por encima de que es una invitación de las mujeres y los hombres neuquinos, también invitan a todo el resto del país y así es que como cordobés, obviamente, lo voy a utilizar gustosamente.

Seguramente, vamos a tener que hacer un balance en los próximos meses para hacer un seguimiento acerca de cómo hemos madurado en toda esta autocrítica, que es tan importante.

Como el senador Marcelo Fuentes dijo, yo también me sumo. Aunque permanentemente destaco el esfuerzo de las mujeres, siempre uno debe hacer mayores esfuerzos para comprometerse en la promoción de lo que significa el rol de la mujer.

Quiero señalar dos cosas; una es respecto del cupo, que siempre suscribí esta discriminación positiva porque, de alguna manera, la realidad nos permitió que hoy se revirtiera lo que históricamente pasaba: los hombres conducían los partidos políticos, armaban las listas, y las mujeres ocupaban los lugares de suplentes a los que accedían por algún compromiso familiar o amoroso. Ahora, me parece que el rol de la mujer ha crecido, ha sido jerarquizado y los resultados están, hoy por hoy, a la vista y en el reconocimiento de todos.

Quiero contar un ejemplo de mi querida Córdoba. Algo que no ocurrió el siglo pasado ni en épocas que nosotros no vivimos. Hay un colegio universitario que se llama “El Monserrat”, que depende del presupuesto de todos los argentinos, ni siquiera de los cordobeses, el cual hasta el año 1998 tenía por norma que el ingreso era únicamente para varones. Me refiero al Colegio Nacional de Monserrat de la Universidad Nacional de Córdoba cuyo reglamento prohibía el ingreso a las mujeres. Fue lucha de las mujeres que la Justicia ordenara la modificación del reglamento y que las mujeres pudieran acceder con el mismo derecho de los hombres.

Parece una cosa difícil de entender pero créanme que les resultó muy difícil romper esta resistencia; a veces hasta los mismos jóvenes eran los que decían que no las querían porque era un colegio de varones y que no iban a romper la tradición y demás. El primer homenaje es para los padres que lucharon para que sus hijas tuvieran la misma oportunidad que aquellos otros padres que tenían hijos varones para ir al Monserrat. El segundo homenaje es para las chicas que teniendo 11 o 12 años tuvieron el coraje para sentarse, porque las primeras promociones eran de pocas chicas, y aguantar las cargadas, las presiones y los desprecios hasta que se fueron integrando.

Hoy es una historia con un final feliz: las chicas forman parte naturalmente, los chicos se han disculpado públicamente de estas conductas y en las últimas dos promociones la abanderada y la primera escolta del Monserrat son mujeres. Esto ocurrió en el año 2007 y también en el año 2008.

El compromiso más simple que quisiera formular hoy es que sigamos luchando juntos para una sociedad más justa. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso, ¿usted va a hacer las observaciones en particular?

Sra. Negre de Alonso. – Así es.

Le voy a pedir que cuando sometamos el proyecto a votación que votemos también las inserciones.

Sr. Presidente. – Cómo no.

Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. – Señor presidente:

Sr. Presidente. – Cómo no.

Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora senadora Perceval. Posteriormente, se procederá a votar el proyecto en consideración.

Sra. Perceval. – “La maté porque era mía”. “La maté porque no era mía”. Tal vez, en estas dos expresiones se reducen los motivos que dan cuenta de que en la Argentina ciento diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas este año, hasta el mes de octubre.

En realidad, hace décadas que venimos enfrentando una falsa creencia: que la violencia es inevitable. Y justamente las mujeres decidimos desterrar esta falsa creencia de la cultura en nuestras sociedades. Decidimos sacar la violencia del encierro, del silencio, del tabú, de la complicidad, de la impunidad en nuestros hogares, en las calles, en el Parlamento, en las fábricas, en las universidades.

Realmente, la rebeldía contra la invisibilidad que asumimos las mujeres ha ido generando resultados positivos. Lo que no era invisible, pero seguía “invisibilizado”, comenzó a ser visto, porque era necesario señalar que la indiferencia, la negación de la violencia no era un asunto detrás de las paredes de un hogar; que ni aun allí era una cuestión privada, sino que se trataba de un profundo e intenso conflicto social que, basado en una estructura de desigualdad y de discriminación, también constituía un delito.

Como bien dijo la senadora Giri, hace cuatro años que esta cuestión está en tratamiento.

Las mujeres estamos muy acostumbradas a esperar; pero estamos tan convencidas de lograr lo que queremos, que hoy tratamos este proyecto de ley de violencia. Y lo llamo así porque hasta el título fue discutido, debatido, polémico. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Nosotras, más de una vez, tampoco sabemos cómo enfrentar esto.

Piensen en las mujeres japonesas que hace tres años fueron víctimas de abusos sexuales en los medios de transporte. Todas hemos sido niñas... ¿Qué se decidió? Que se debían habilitar vagones separados en los subterráneos, uno para varones y otro para mujeres. Y estoy hablando de los países desarrollados, sobre todo porque en alguna de las intervenciones se quiso señalar que el infierno es la Argentina. ¡No! Es el mundo injusto y el que discrimina a la mujer.

Viena, 1997. Se aprueba un proyecto residencial llamado “Mujeres, trabajo, ciudad”, que resolvió el problema de la inseguridad de las mujeres en las calles, víctimas de violación, creando un barrio sólo para mujeres. ¿Era esta la salida? ¿Era ésta la respuesta? ¡No sólo discriminadas, sino también en un mundo paralelo!

No fue ése el camino que decidimos en el Senado de la Nación argentina. Elegimos denunciar, durante estos largos años, que la violencia contra la mujer es intolerable, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus manifestaciones, en todos los ámbitos. Señalamos que la violencia contra la mujer no es un dato de la naturaleza, que el hombre no es violento por naturaleza, que no se trata de una patología neurótica ni de una psicosis individual. Como dijeron los senadores y las senadoras preopinantes, se trata de una estructura social, histórica, cultural, en donde aparece la desigualdad y la discriminación como rostros cotidianos. En el espíritu de este proyecto de ley quisimos destruir el mito de que toda mujer puede ser víctima de la misma manera. O sea, decimos que sí; que toda mujer puede ser víctima de violencia. Pero no toda mujer tiene el mismo riesgo. Por eso, en este proyecto de ley se prevé la asistencia gratuita para las mujeres y se contemplan políticas sociales y educativas y el rol de los medios de comunicación. Es decir, porque si bien sabemos que todas podemos ser víctimas de violencia, nos consta que la pobreza y la exclusión social son factores de revictimización de las víctimas, que las convierte en más vulnerables. En consecuencia, quisimos reafirmar en el espíritu de este proyecto de ley que la libertad es un bien que nadie nunca está autorizado a enajenar: ni a los varones, ni a las mujeres. La libertad, para nosotras, no es un fenómeno individual. Sólo se es libre si todos y todas somos libres. Y para ello, estamos convencidas de que debe haber igualdad.

El espíritu de esta norma se ha debatido largamente. En un momento, buscamos el camino de penalizar todo lo que significara discriminación y desigualdad contra la mujer. Pero ésta no es una norma penalizadora. No estamos inflacionando el Código Penal, ni estamos inventando un derecho penal del enemigo. Estamos elaborando una ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres,

apostando a la transformación cultural y a una revolución pacífica en las relaciones de poder. (*Aplausos en las galerías.*)

Estamos diciendo que el problema es social. No hay mujeres condenadas por su temperamento, por su sexo, por su lugar de residencia o por su autonomía o dependencia económica. No hay motivo, si no hay una cultura que legitime, sostenga y perpetúe la violencia contra las mujeres.

Por ello, tratamos de armonizar en el espíritu de este proyecto de ley los instrumentos internacionales que con la militancia de miles y miles de mujeres fuimos logrando, porque los instrumentos internacionales son letra muerta si no hay leyes de aplicación que exijan y garanticen políticas públicas que los hagan efectivos. Estamos venciendo aquel viejo aforismo español que decían las mujeres, según el cual parece que la ley se acata, pero nunca se cumple.

Entonces, huimos de la fiebre penalizadora. Entendimos que la violencia contra las mujeres no sólo existe en asuntos de violencia intrafamiliar, sino que hay más violencias. No sólo es la violencia doméstica. Entendimos que es necesario fortalecer medidas extrapenales para construir la cultura de la no violencia. En ese sentido, hemos establecido medidas preventivas urgentes para que los imperativos legales tengan que ver con las políticas reales. Realmente, hemos trabajado para que la información sea un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, a través del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. Hemos elaborado una norma que es una herramienta de construcción de políticas públicas.

Señor presidente: quiero terminar con el saludo de una querida amiga, Minou Tavarez Mirabal, hija de Minerva, la hija de la mujer que fue asesinada junto a sus dos hermanas, lo cual dio lugar a que Naciones Unidas estableciera el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Minou, diputada por la República Dominicana, nos escribe encabezando su carta con la expresión “queridas amigas”. Dice allí que esa mañana, mientras conmemoraba en lo que era su casa materna y hoy la Casa Museo “Hermanas Mirabal”, en la provincia que lleva el nombre “Hermanas Mirabal”, en este Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las

Mujeres, llegó el correo con la noticia de que mañana –por hoy– la Cámara de Senadores de la Argentina daría sanción a un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Continúa diciendo que quiere manifestar a todos los senadores y senadoras que han propuesto esta iniciativa su solidaridad, la de su Congreso y la de su país, y que la República Dominicana no escapa a esta dura realidad. De hecho, nos dice que ciento sesenta y una dominicanas han sido asesinadas en lo que va del año por sus parejas. También nos dice que, como hija de Minerva Mirabal, nos agradece por esta iniciativa, y nos apoya al decir una y otra vez por vía de las leyes que no hay que dar ni un paso atrás: “no a la violencia contra las mujeres”.

Esta reconocida mujer lleva también a rendir un homenaje –usaré un nombre de ficción– a Carolina, quien se acercó ayer a mi despacho. Se trata de una mujer muy joven, como miles de mujeres argentinas. Carolina se enteró a través de la radio de que íbamos a tratar este proyecto. Me contó que había estado en la casa de una amiga festejando su cumpleaños –eran dos amigas y la cumpleañosera–; que su ex pareja –hacía siete meses que se habían separado– apareció de golpe; que entró a la vivienda, dado que se había quedado con copia de la llave; que golpeó incansablemente a las tres; que, cuando llamaron a los vecinos, nadie acudió; que llamaron a la comisaría; que la policía se acercó a la hora y media; y que llamaron al servicio de salud diciendo “vengan rápido porque tenemos tres mujeres en estado de nervios”. Nada dijeron acerca de la violencia. En su caso particular, cuenta que pasó el médico, la revisó y le dijo que nada podía hacer excepto darle una pastillas; pero no le dijo de qué pastillas se trataba. De ahí fueron a la comisaría, donde contaron por cuarta vez lo que les había pasado, y el comisario les dijo: ¡“Ah, andaban en un boliche!”.

La revictimización fue mucho más larga. De la comisaría, fueron a otro médico, quien dijo: “Al final, venís diciendo que te han pegado pero resulta que ustedes son violentas porque quieren ser atendidas rápido”. Y así continuó: de la comisaría a otro hospital, y de ese hospital a otro. En realidad, la conclusión de quienes debían protegerla fue: “¡No entendemos! Mientras vos andabas fuera de tu casa, nosotros nos quedamos aquí y

conocimos al muchacho. Es un muchacho agradable; conversamos mucho. ¡Qué raro que vos no pudieras arreglar las cosas con él conversando!” Hoy, a Carolina le diagnosticaron perforación de tímpano en el oído derecho por golpes.

Por Carolina y por las miles de mujeres argentinas que esperan una ley de erradicación, prevención y sanción de la violencia por género, recordamos, conmemoramos y nos comprometemos con la no violencia contra la mujer, en ninguna de sus formas. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, pasaremos a votar el proyecto de ley, que tiene 45 artículos agrupados en cuatro títulos.

Como es norma en este Senado, en primer lugar, votaremos en general y, luego, en particular por títulos, pues hay algunos senadores que están anotados para hacer uso de la palabra en la mencionada instancia.

Primero, se van a votar las inserciones solicitadas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.¹

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50 votos por la afirmativa. Unanimidad. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.²

Sr. Presidente. – Senador Pérez Alsina: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Pérez Alsina. – Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 51.

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.

Pasamos a la consideración en particular.

Si no se hace uso de la palabra, se votar el título I, artículos 1° al 6°.

Sra. Gallego. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Como fueron introducidas algunas modificaciones para lograr la unanimidad, propongo que el secretario parlamentario proceda a dar lectura solamente de cómo quedaría redactado el artículo que tiene modificación. Luego, votamos el capítulo.

Sr. Presidente. – Entonces, vamos a ir considerando por títulos. En los capítulos 1° a 6° ¿ha habido alguna modificación?

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Como ha sido distribuido el texto a considerar con las modificaciones introducidas y todos lo tenemos en las bancas, pido que no se lea. Simplemente, que se haga la salvedad de que lo que estamos aprobando es el texto distribuido esta tarde, que ya tiene las modificaciones.

Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senadora Gallego?

Sra. Gallego. – Sí.

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: si vamos a tratar el título I, quiero manifestar que es ahí donde tengo dos únicas objeciones para realizar.

Voy a votar en forma negativa al artículo 3°, habiendo propuesto otro texto distinto.

Haré otro tanto respecto del artículo 4°, en virtud de que considero que su redacción no respeta los presupuestos de la responsabilidad, al hablar inclusive de “afectación” en vez de “daño”, que tiene que ver con las responsabilidades directa e indirecta.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Si no hay más objeciones, con la salvedad de lo expresado por la senadora Negre de Alonso, propongo que procedamos a la consideración en particular en una sola votación.

Sra. Escudero. – Pido la palabra.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Es sólo una cuestión de redacción. Quiero que se tome nota por Secretaría.

En el artículo 16, inciso j) tiene que quedar la expresión “a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial, en caso de consentirlas y en los peritajes judiciales”. A continuación, sigue exactamente como está.

En el artículo 18, se elimina “administrativa”, quedando solamente “denuncia”. Por su parte, al final, quedaría la expresión “en aquellos casos en que el hecho no configure delito”.

Sr. Presidente. – Son aceptadas esas modificaciones.

Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero hacer un agregado en el artículo 24. Lo he consultado con la senadora Gallego y con otras señoras legisladoras para ver si estaban de acuerdo. Se refiere al inciso f). Está en relación con la Convención de Belém do Pará sobre erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

Sra. Gallego. – No.

Sra. Estenssoro. – Al referirse a las personas que pueden efectuar la denuncia, respecto de quien lo haga por pedido de la agraviada, quiero que se agregue que se debe guardar reserva de la identidad de quien presente la denuncia, cuando aquélla así lo requiriese. La persona afectada debe ratificar en 72 horas la presentación deducida en su favor. La notificación se debe efectuar sin identificar al denunciado ni la carátula del expediente y sólo contendrá el comparendo al juzgado o tribunal.

Esto es para el caso de que las víctimas estén en una situación tal que no puedan hacer la denuncia en ese momento y pidan a un tercero que lo haga. Como decía, esto está en línea con el artículo 7º, inciso f), de la Convención de Belém do Pará.

Creo que sería una buena inclusión. De hecho, entendía que lo habíamos acordado hace un rato. Me sorprende en este momento escuchar que no fue así, porque –repito– creo que sería una buena inclusión. Hay muchas mujeres que están como en un estado de *shock*.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. – En realidad, el concepto que propone la senadora Estenssoro –aunque no en la extensión ni explicitado como ella lo señala en su redacción– está incluido en el inciso c) del mismo artículo 24. Por eso no aceptamos las modificaciones.

Sr. Presidente. – Para ordenarnos: hay una propuesta del senador Pichetto en el sentido de expresar todas las observaciones a los artículos, a efectos de votar el resto de la iniciativa en conjunto. Entonces, estamos hablando de eso.

Tienen la palabra la senadora Negre de Alonso y, después, la senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Negre de Alonso. – Le quiero pedir a la presidenta de la comisión que considere lo siguiente.

Lo que la senadora Estenssoro está pidiendo es agregar la reserva de la identidad cuando fuere requerido y la denuncia se hiciera a través de terceras personas; es eso. Creo que esta mañana lo habíamos acordado en la reunión. Sería la posibilidad de reservar la identidad, inclusive, para facilitar las denuncias.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Señor presidente: en realidad, la reserva de la identidad de la denuncia está puesta en el texto del proyecto de ley cuando planteamos los principios rectores. Es sobrea-bundante, es repetitivo.

En el inciso c), y anteriormente en el resto de los incisos, están contempladas las dos propuestas que hace la senadora Estenssoro. Por eso no las aceptamos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Pinchetti de Sierra Morales. Después, le doy la palabra a la senadora Estenssoro.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor presidente: quiero dejar constancia del voto en contra en nada más que dos artículos, tanto del senador Salazar como de quien les habla. Me refiero a los artículos 3º y 4º; y es por los mismos motivos que ya ha expresado la senadora Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Quiero volver al artículo 24.

Si bien el inciso c) también habla de esto, está más referido a una persona que tenga discapacidad. Justamente, el hecho de que tenga que ratificar a las 72 horas no está hablando de discapacidad o de un impedimento psíquico sino más bien de un estado de *shock* temporario; por eso se pide esa ratificación.

Considero que mi propuesta mejora el proyecto de ley y no veo por qué esta resistencia.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Gallego.

Sra. Gallego. – Como miembro informante de las comisiones, reitero: el inciso hay que leerlo completo. No vamos a aceptar la modificación, así que solicito que se ponga a votación.

Sr. Presidente. – Senador Fuentes, ¿tiene alguna observación en algún artículo?

Sr. Fuentes. – Simplemente, completando lo que decía la senadora informante, quería manifestar que hay cuestiones de reglamentación.

La ley no es una descripción pormenorizada; es decir, implica un universo y un plexo normativo ordenado y coherente. Eso va por vía de reglamentación, acompañando la propuesta de la senadora.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Forstmann.

Sra. Forstmann. – Sólo quiero completar lo ya dicho por la senadora Gallego y, también, hacer referencia a un punto exacto del proyecto: el artículo 21. Ahí se expresa que se va a guardar reserva de identidad de la persona denunciante.

Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar del artículo 1° al 44. El artículo 45 es de forma.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 51 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa, salvo las reservas hechas por la senadora Negre de Alonso, la senadora Pinchetti de Sierra Morales y el senador Salazar.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.¹

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley. Se remitirá a la brevedad a la Honorable

Cámara de Diputados.² (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

12

REINCORPORACION DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que le dé el uso de la palabra al señor senador Ríos, quien va a solicitar la reincorporación de un tema al Plan Labor.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que se vuelva a incorporar entre los asuntos sobre tablas acordados el Orden del Día no impreso N° 1.206, que trata sobre el expediente C.D.-69/08.

Sr. Presidente. – ¿Cuál es el tema, señor senador Ríos?

Sr. Ríos. – Es el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la vigencia del impuesto a la ganancia mínima presunta.

En este sentido, hice las consultas del caso a la mayoría de los bloques presentes y me dijeron que no había inconveniente en volver a incorporarlo en el temario para su tratamiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar la moción realizada por el señor senador Ríos, en el sentido de reincorporar el Orden del Día no impreso N° 1.206 al temario de esta sesión, dentro de los asuntos sobre tablas acordados.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Le quiero recordar al señor senador Ríos que el Grupo Federal es la segunda minoría de esta Cámara y, en verdad, a mí no me preguntó nada. Se ve que no estamos dentro de la mayoría de los bloques presentes; o sea, que no seríamos senadores presentes.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Designar a la señora Silvia Edith Martínez (DNI 18.272.271), para ocupar el cargo de Procurador Penitenciario, durante un período de cinco años.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. C. COBOS.

Juan Estrada.

112

(Orden del Día N° 1.205)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley S.-25/07 de la señora senadora Giri contra la violencia laboral; el proyecto de ley S.-578/07 de la señora senadora Maza, que reproduce el proyecto de ley sobre violencia en el trabajo (ref. 166/05); el proyecto de ley S.-2.684/07 de la señora senadora Giri y otros sobre violencia doméstica; el proyecto de ley S.-38/08 de la señora senadora Perceval, que reproduce el proyecto de ley creando el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (ref. 4.178/06); el proyecto de ley S.-40/08 de la señora senadora Perceval, que reproduce el proyecto de ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres (ref. 4.380/06); el proyecto de ley S.-905/08 de la señora senadora Viudes garantizando a las mujeres el pleno reconocimiento de sus derechos y garantías establecido en la Constitución Nacional y la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres; el proyecto de ley S.-1.538/08 de la señora senadora Forstmann sobre prevención y sanción de la violencia laboral; el proyecto de ley S.-3.626/08 de la señora senadora Gallego de protección integral para erradicar la violencia contra las mujeres; el proyecto de ley S.-3.719/08 del señor senador Morales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; y tenido a la vista el proyecto de ley S.-2.966/07 del señor senador Basualdo disponiendo la realización de una campaña de publicidad destinada a la no violencia contra la mujer, a partir del 25 de noviembre de cada año, y el proyecto de ley S.-2.283/07 de la señora senadora Bar estableciendo la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, y, por las

razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

**LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA
PREVENIR, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN
QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES
INTERPERSONALES**

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1° – *Ámbito de aplicación. Orden público.* Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.

Art. 2° – *Objeto.* La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

- a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
- b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;
- c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
- d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre no violencia contra las mujeres;
- e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
- f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
- g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

Art. 3° – *Derechos protegidos.* Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y, en especial, los referidos a:

- a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
- b) La salud, la educación y la seguridad personal;

- c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
- d) Que se respete su dignidad;
- e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
- f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
- g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
- h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
- i) Gozar de acceso gratuito a la Justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;
- j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
- k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

Art. 4º – *Definición*. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basadas en una relación desigual de poder, afecten su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica aparentemente neutras que pongan a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Art. 5º – *Tipos*. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

- 1) Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño, o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
- 2) Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cual-

quier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

- 3) Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
- 4) Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

- a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
- b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
- c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios dispensables para vivir una vida digna; la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo lugar de trabajo.

- 5) Simbólica: la que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Art. 6º – *Modalidades*. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

- a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independiente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres.

Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones

vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

- b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y de la sociedad civil;
- c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
- d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos;
- e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, provocando pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad;
- f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados, a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TÍTULO II

Políticas públicas

CAPÍTULO I

Preceptos rectores

Art. 7º – *Preceptos rectores*. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional y provincial, adop-

tarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

- a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
- b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimización de la violencia contra las mujeres;
- c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin de promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
- d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas, así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;
- e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;
- f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;
- g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
- h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPÍTULO II

Organismo competente

Art. 8º – *Organismo competente*. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.

Art. 9º – *Facultades*. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:

- a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
- b) Articular y coordinar las acciones, para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial

- y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
- c) Convocar y constituir un consejo consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
 - d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;
 - e) Garantizar modelos de abordaje, tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia, que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;
 - f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
 - g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;
 - h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las fuerzas armadas, los que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;
 - i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
 - j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;
 - k) Diseñar e implementar registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los ministerios y secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los consejos federales con competencia en la materia;
 - l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas al victimario. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;
 - m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;
 - n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres;
 - ñ) Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;
 - o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a sus víctimas;
 - p) Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia, y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;
 - q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;
 - r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;

- s) Convocar y poner en funciones al Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
- t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;
- u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

CAPÍTULO III

Lineamientos básicos para las políticas estatales

Art. 10. – *Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones.* El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a los hombres que la ejercen, debiendo garantizar las siguientes líneas programáticas:

1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
2. Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:
 - a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;
 - b) Grupos de ayuda mutua;
 - c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
 - d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;
 - e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.
3. Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
4. Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
5. Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los

casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

7. Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

Art. 11. – *Políticas públicas.* El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

1. Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:
 - a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;
 - b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.
2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:
 - a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;
 - b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;
 - c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;
 - d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;
 - e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;
 - f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.
3. Ministerio de Educación de la Nación:

- a) Articular, en el marco del Consejo Federal de Educación, la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, al ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;
 - b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;
 - c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;
 - d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de posgrado;
 - e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;
 - f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.
4. Ministerio de Salud de la Nación:
- a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;
 - b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en ámbito del Consejo Federal de Salud;
 - c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;
 - d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;
 - e) Impulsar la aplicación de un registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales;
 - f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;
 - g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;
 - h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;
 - i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:
- 5.1. Secretaría de Justicia:
- a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;
 - b) Promover la aplicación de convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;
 - c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

- d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
- e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;
- f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;
- g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;
- h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados.

5.2. Secretaría de Seguridad:

- a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;
- b) Elaborar, en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policiales y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
- c) Promover la articulación de las fuerzas policiales y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;
- d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policiales y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

- e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):

- a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

- a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:
 - 1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección.
 - 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación.
 - 3. La permanencia en el puesto de trabajo.
 - 4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función;
- b) Promover, a través de programas específicos, la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
- c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;
- d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7. Ministerio de Defensa de la Nación:

- a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las fuerzas armadas a la Convención para la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

- b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las fuerzas armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;
 - c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
 - d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.
8. Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:
- a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización, dirigidas a la población en general y en particular a las mujeres, sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;
 - b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;
 - c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;
 - d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
 - e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO IV

Observatorio de la violencia contra las mujeres

Art. 12. – *Creación.* Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

Art. 13. – *Misión.* El observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Art. 14. – *Funciones.* Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

- a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática, y comparable diacrónica y sincrónicamente, sobre violencia contra las mujeres;
- b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causa de violencia;
- c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;
- d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
- e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevantes, estudios y actividades del observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;
- f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;
- g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
- h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de

experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

- i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los registros y los protocolos;
- j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;
- k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

Art. 15. – Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

- a) Una persona designada por la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la dirección del observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;
- b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TÍTULO III

Procedimientos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 16. – Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo que las afecte, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
- b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
- c) A ser oída personalmente por el juez y/o por la autoridad administrativa competente;
- d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
- e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3° por la presente ley;
- f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;

g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;

h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Art. 17. – Procedimientos administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por medio de los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los consejos provinciales de la mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Art. 18. – Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen previsto en el presente capítulo.

Art. 19. – Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Art. 20. – Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

Art. 21. – Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aun en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinentes.

Art. 22. – Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiera la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro (24) horas.

Art. 23. – *Personas que pueden efectuar la denuncia.* Las denuncias podrán ser efectuadas:

- a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;
- b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
- c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;
- d) La denuncia será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento directo o indirecto de que una mujer padece violencia. El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el título XI, capítulo IV, del Código Penal de la Nación.

En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

Art. 24. – *Asistencia protectora.* En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

Art. 25. – *Medidas preventivas urgentes.* Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley:

- a) Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia y sus familiares;
- b) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer o hacia los restantes miembros del grupo familiar;
- c) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;
- d) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el decomiso de las que estuvieren en su posesión;

- e) Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
- f) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;
- g) Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;
- h) Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda de su presunto agresor;
- i) Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;
- j) En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;
- k) En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad;
- l) Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;
- m) Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as;
- n) Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;
- ñ) Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa;
- o) Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;
- p) Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.

Art. 26. – *Facultades del/la juez/a.* El/la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias

del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

Art. 27. – *Audiencia.* El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 25, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061 sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

Art. 28. – *Informes.* Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o cesar alguna de las mencionadas en el artículo 25.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Art. 29. – *Prueba: principios y medidas.* El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.

Art. 30. – *Resoluciones.* Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Art. 31. – *Sanciones.* Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

- a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
- b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
- c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

Art. 32. – *Apelación.* Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se concederá con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.

En todos los casos, la apelación se otorgará en relación.

Art. 33. – *Seguimiento.* Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Art. 34. – *Reparación.* La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

Art. 35. – *Obligaciones de los/las funcionarios/as.* Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

- a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;
- b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
- c) Cómo preservar las evidencias.

Art. 36. – *Registros.* La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece

violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Art. 37. – *Colaboración de organizaciones públicas o privadas.* Los/as jueces/juezas podrán solicitar o aceptar en carácter de *amicus curiae* la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Art. 38. – *Exención de cargas.* Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

Art. 39. – *Normas supletorias.* Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TÍTULO IV

Disposiciones finales

Art. 40. – *Vigencia de la ley 24.417.* La ley 24.417 de protección contra la violencia familiar será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

Art. 41. – *Cláusula presupuestaria.* Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la ley de presupuesto general de la administración nacional.

Art. 42. – *Entrada en vigencia.* La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo .

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 19 noviembre de 2008.

Silvia E. Gallego. – Pedro E. Guastavino. – Rubén H. Marín. – Gerardo R. Morales. – Haide Giri. – Roberto F. Ríos. – Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff. – María J. Bongiorno. – Julio A. Miranda. – Elena M. Corregido. – Ernesto R. Sanz. – Adriana Bortolozzi de Bogado. – Nicolás A. Fernández. – César A. Gioja. – Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. – Eric

Calcagno y Maillmann. – Marcelo J. Fuentes. – Elida M. Vigo. – Selva J. Forstmann. – Marcelo A. H. Guinle. – Ada Maza. – Mónica R. Troadello. – Ada Iturrez de Cappellini. – Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. – José M. A. Mayans. – María C. Perceval. – Marina R. Riofrio. – Blanca I. Osuna. – Nanci Parrilli. – Roy Nikisch. – José C. Martínez. – María D. Sánchez. – José J. B. Pampuro. – Ramón E. Saadi. – Teresita N. Quintela.

En disidencia parcial:

Isabel J. Viudes.

ACLARACIÓN

Los distintos proyectos presentados por los señores senadores y considerados por las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda, se encuentran publicados en la página web del Senado.

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2008.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º – *Ámbito de aplicación. Orden público.* Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el capítulo II del título III de la presente.

Art. 2º – *Objeto.* La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

- a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones;
- b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

- c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
- d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre no violencia contra las mujeres;
- e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
- f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
- g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

Art. 3º – *Derechos protegidos*. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, en especial, los referidos a:

- a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;
- b) La salud, la educación y la seguridad personal;
- c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;
- d) Que se respete su dignidad;
- e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
- f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;
- g) Recibir información y asesoramiento adecuado;
- h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;
- i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;
- j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;
- k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

Art. 4º – *Definición*. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Art. 5º – *Tipos*. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

1. *Física*: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.
2. *Psicológica*: la que causa daño emocional y disminución de autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
3. *Sexual*: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4. *Económica y patrimonial*: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
 - a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
 - b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
 - c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios dispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5. *Simbólica*: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Art. 6º – *Modalidades*. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

- a) *Violencia doméstica contra las mujeres*: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;
- b) *Violencia institucional contra las mujeres*: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
- c) *Violencia laboral contra las mujeres*: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;
- d) *Violencia contra la libertad reproductiva*: aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
- e) *Violencia obstétrica*: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929;
- f) *Violencia mediática contra las mujeres*: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TITULO II

Políticas públicas

CAPÍTULO I

Preceptos rectores

Art. 7º – *Preceptos rectores*. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

- a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
- b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;
- c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;
- d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;

- e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;
- f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;
- g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
- h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPÍTULO II

Organismo competente

Art. 8º – *Organismo competente*. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.

Art. 9º – *Facultades*. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:

- a) Elaborar, implementar y monitorear un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres;
- b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;
- c) Convocar y constituir un consejo consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;
- d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;
- e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;

- f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;
- g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de sus protocolos para los distintos niveles de atención;
- h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las fuerzas armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;
- i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;
- j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;
- k) Diseñar e implementar registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los ministerios y secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los consejos federales con competencia en la materia;
- l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados –como mínimo– por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencia;
- m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

- n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres;
- ñ) Diseñar y publicar una guía de servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;
- o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;
- p) Establecer y mantener un registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;
- q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;
- r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;
- s) Convocar y poner en funciones al consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;
- t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas.
- u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.
- interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:
1. Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
 2. Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:
 - a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;
 - b) Grupos de ayuda mutua;
 - c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;
 - d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;
 - e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.
 3. Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.
 4. Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.
 5. Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.
 6. Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.
 7. Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

Art. 11. – *Políticas públicas.* El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

1. *Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública*

CAPÍTULO III

Lineamientos básicos para las políticas estatales

Art. 10. – *Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones.* El Estado nacional deberá promover y fortalecer

- a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;
- b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.

2. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

- a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;
- b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;
- c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;
- d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinados a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;
- e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;
- f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.

3. Ministerio de Educación de la Nación

- a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, al ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;
- b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;
- c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;
- d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de posgrado;

- e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;
- f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

4. Ministerio de Salud de la Nación

- a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;
- b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en ámbito del Consejo Federal de Salud;
- c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;
- d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;
- e) Impulsar la aplicación de un registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales;
- f) Asegurar la asistencia especializada de los/as hijos/as testigos de violencia;
- g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;
- h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

- i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación

5.1. Secretaría de Justicia

- a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;
- b) Promover la aplicación de convenios con colegios profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;
- c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;
- d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;
- e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;
- f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;
- g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;
- h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;
- i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

5.2. Secretaría de Seguridad

- a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;

- b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acuden a presentar denuncias en sede policial;
- c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;
- d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
- e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)

- a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación

- a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:
 - 1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección.
 - 2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación.
 - 3. La permanencia en el puesto de trabajo.
 - 4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función;
- b) Promover, a través de programas específicos, la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;
- c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;
- d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en parti-

cular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7. *Ministerio de Defensa de la Nación*

- a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las fuerzas armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;
- b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las fuerzas armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;
- c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;
- d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.

8. *Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación*

- a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general, y en particular a las mujeres, sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;
- b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;
- c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;
- d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;
- e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPÍTULO IV

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres

Art. 12. – *Creación.* Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

Art. 13. – *Misión.* El observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Art. 14. – *Funciones.* Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

- a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;
- b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causa de violencia;
- c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;
- d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
- e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;
- f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;
- g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;
- h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

- i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los registros y los protocolos;
- j) Articular las acciones del observatorio de la violencia contra las mujeres con otros observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;
- k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

Art. 15. – *Integración.* El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

- a) Una persona designada por la presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la dirección del observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;
- b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TÍTULO III

Procedimientos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 16. – *Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos.* Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

- a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;
- b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;
- c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;
- d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;
- e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;
- f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;

- g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
- h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;
- i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;
- j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizadas por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
- k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

Art. 17. – *Procedimientos administrativos.* Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los consejos provinciales de la mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

Art. 18. – *Denuncia.* Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus áreas tomen conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, en aquellos casos en que el hecho no configure delito.

CAPÍTULO II

Procedimiento

Art. 19. – *Ámbito de aplicación.* Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley.

Art. 20. – *Características del procedimiento.* El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

Art. 21. – *Presentación de la denuncia.* La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

Art. 22. – *Competencia.* Entenderá en la causa el/ la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aun en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

Art. 23. – *Exposición policial.* En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiera la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las veinticuatro (24) horas.

Art. 24. – *Personas que pueden efectuar la denuncia.* Las denuncias podrán ser efectuadas:

- a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;
- b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
- c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;
- d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en veinticuatro (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público;
- e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomen conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.

Art. 25. – *Asistencia protectora.* En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

Art. 26. – *Medidas preventivas urgentes.*

- a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5° y 6° de la presente ley:
 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia.
 2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación

que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer.

3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos.
4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión.
5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer.
7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer;
- b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
 1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente.
 2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma.
 3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor.
 4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia a su domicilio para retirar sus efectos personales.
 5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia.
 6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por

consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas.
8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/as.
9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno.
10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.

Art. 27. – *Facultades del/la juez/a*. El/la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

Art. 28. – *Audiencia*. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la ley 26.061 sobre protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

Art. 29. – *Informes*. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otra medida, interrumpir o cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo

sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

Art. 30. – *Prueba: principios y medidas*. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.

Art. 31. – *Resoluciones*. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Art. 32. – *Sanciones*. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las medidas preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

- a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;
- b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
- c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas;

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

Art. 33. – *Apelación*. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se concederá con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá con efecto suspensivo.

Art. 34. – *Seguimiento*. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante

la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

Art. 35. – *Reparación.* La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

Art. 36. – *Obligaciones de los/las funcionarios/as.* Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

- a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;
- b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;
- c) Cómo preservar las evidencias.

Art. 37. – *Registros.* La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, características de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

Art. 38. – *Colaboración de organizaciones públicas o privadas.* Los/as jueces/juezas podrán solicitar o aceptar en carácter de *amicus curiae* la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

Art. 39. – *Exención de cargas.* Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

Art. 40. – *Normas supletorias.* Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO IV

Disposiciones finales

Art. 41. – En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley, importarán la

creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.

Art. 42. – La ley 24.417, de protección contra la violencia familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

Art. 43. – Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la ley de presupuesto general de la administración nacional.

Art. 44. – La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

113

(Orden del Día N° 1.075)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales han considerado los siguientes proyectos de ley: (I) del señor senador Ramón Saadi, estableciendo la obligatoriedad de identificar los productos medicinales aptos para el consumo de enfermos celíacos (expediente S.-2/07); (II) de la señora senadora (m.c.) Mabel Caparrós, estableciendo el Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca (expediente S.-371/07); (III) de la señora senadora Adriana Bortolozzi de Bogado, sobre protección de los enfermos celíacos (expediente S.-2.752/07); (IV) de la señora senadora Silvia E. Giusti, incorporando dentro del Programa Médico Obligatorio a las personas que padezcan la enfermedad celíaca (expediente S.-3.199/07); (V) del señor senador Miguel Ángel Pichetto y otros declarando de interés nacional el estudio, investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca (expediente S.-1.217/08); (VI) del señor senador Ernesto Sanz, estableciendo normas para la venta de productos aptos para celíacos (expediente S.-1.739/08) y (VII) el proyecto de ley de la señora senadora Nanci Parrilli, declarando de interés nacional el estudio, investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca (expediente S.-1.882/08); y ha tenido a la vista los siguientes proyectos de ley: (I) del señor senador Guinle, sobre creación del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Enfermedad Celíaca (expediente S.-2.994/07); (II) de la señora senadora Liliana Negre de Alonso, estableciendo la obligatoriedad de identificar los alimentos respectivo de su aptitud o no para ser consumidos por celíacos (expediente S.-3.110/07); (III) del señor senador Daniel Pérsico, promoviendo la producción de los alimentos específicos para la dieta de los enfermos celíacos (expediente S.-1.319/08); y (IV) de la señora senadora Haide Giri, modificando la ley 24.827 –productos para celíacos– (expediente S.-2.735/08); y,

Votación Nóminal

126° Período Legislativo - Ordinario - 19° Sesión

DICTAMEN EN VARIOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

ORDEN DEL DÍA 1205
(S-250,578, 2684/07 Y 38, 40, 905, 1538, 3626 Y 3719/08)

VOTACIÓN EN GENERAL

Observaciones: Dictamen de mayoría, con modificaciones
Tenidos a la vista S-2966/07 y S-2283/07

Acta N°: 2	Fecha: 26-11-08	Hora: 19:09
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	50	Votos afirmativos:	50
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	50	Abstenciones:	-
Ausentes:	22		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

	Versión Original	Actual
PEREZ ALSINA, Juan Agustin	AUSENTE	AFIRMATIVO

Observaciones:

El senador Perez Alsina se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.

Modificaciones realizadas el 26/11/08

Presentes Identificados:	50	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

126º Periodo Legislativo – Ordinario - 19ª Sesión

DICTAMEN EN VARIOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

ORDEN DEL DÍA 1205
(S-250,578, 2684/07 Y 38, 40, 905, 1538, 3626 Y 3719/08)

VOTACIÓN EN GENERAL

Observaciones: Dictamen de mayoría, con modificaciones
Tenidos a la vista S-2966/07 y S-2283/07

Acta N°: 2

Fecha: 26-11-08

Hora: 19:09

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Dario	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	AUSENTE	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AUSENTE	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	LEV.VOT
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AUSENTE
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AUSENTE	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AUSENTE	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AUSENTE
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE	VERA, Arturo	AUSENTE
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AUSENTE
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO

Votación Nominal

126° Período Legislativo - Ordinario - 19° Sesión

DICTAMEN EN VARIOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

ORDEN DEL DÍA 1205
(S-250, 578, 2684/07 Y 38, 40, 905, 1538, 3626 Y 3719/08)

VOTACIÓN EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría, con modificaciones
Tenidos a la vista S-2966/07 y S-2283/07

Acta N°: 3 Fecha: 26-11-08 Hora: 19:19
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C. Desempate: NO

Presentes Identificados:	51	Votos afirmativos:	51
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	-
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
Votos Afirmativos Necesarios:	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones

		Versión Original	Actual
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.	Arts. 3° y 4°	AFIRMATIVO	NEGATIVO
PINCHETTI DE SIERRA MORALES D.	Arts. 3° y 4°	AFIRMATIVO	NEGATIVO
SALAZAR, Carlos E.	Arts. 3° y 4°	AFIRMATIVO	NEGATIVO

Observaciones:

Las senadoras Negre de Alonso, Pinchetti de Sierra Morales y el senador Salazar dejan constancia de su voto negativo en los artículos 3° y 4°.

Modificaciones realizadas el 26/11/08

Artículos 3° y 4°

Presentes Identificados:	51	Votos afirmativos:	48
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	3
Total Presentes:	51	Abstenciones:	-
Ausentes:	21		
	26	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

126º Periodo Legislativo - Ordinario - 19º Sesión

DICTAMEN EN VARIOS PROYECTOS DE LEY SOBRE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS ÁMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES.

ORDEN DEL DÍA 1205
(S-250, 578, 2684/07 Y 38, 40, 905, 1538, 3626 Y 3719/08)

VOTACIÓN EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría, con modificaciones.
Tenidos a la vista S-2966/07 y S-2283/07

Acta N°: 3

Fecha: 26-11-08

Hora: 19:19

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempeño: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
BONGIORNO, María José	AUSENTE	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AFIRMATIVO
CASTILLO, Oscar Anibal	AUSENTE	NIKISCH, Roy Abelardo	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	AUSENTE	PAMPURO, José Juan Bautista	AUSENTE
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María	AUSENTE	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	AFIRMATIVO
ESCUADERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AUSENTE
ESTENSSORO, María Eugenia	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AUSENTE	PINCHETTI DE SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AUSENTE	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FORSTMANN, Selva Judit	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	AFIRMATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AFIRMATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	AUSENTE	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	AFIRMATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AUSENTE	SANZ, Ernesto Ricardo	AUSENTE
JENEFES, Guillermo Raúl	AUSENTE	TORRES, Eduardo Enrique	AUSENTE
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	TROADELLO, Mónica	AUSENTE
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
MARIN, Rubén Hugo	AUSENTE	VERA, Arturo	AUSENTE
MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO	VERANI, Pablo	AFIRMATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AUSENTE
MASSONI, Norberto	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO

2

**Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Tema: Consejo Federal de Adultos
Mayores**

(O.D.-903/08)

Señor presidente:

La edad promedio de la población mundial tiende a incrementarse, merced al aumento de la esperanza de vida brindado por los avances de la ciencia médica. Esto ocurre especialmente en los países desarrollados, en los que ya podemos hablar de una expectativa de subsistencia que alcanza la edad de 80 años. Si a dicho fenómeno le agregamos los efectos de la reducción de la tasa de natalidad, nos encontraremos con que la población mundial de adultos mayores ha aumentado y seguirá aumentando su proporción en relación al resto de los habitantes.

Debido a este fenómeno, cada vez son más las familias de tres, cuatro e incluso cinco generaciones, y es por ello que a nivel internacional ya se habla tanto de la tercera edad como de la cuarta edad, considerando dentro de esta última a quienes hayan traspasado los ochenta años de edad.

Si a ello agregamos que la producción de bienes y servicios para el mantenimiento de la sociedad es generada fundamentalmente por los tramos más jóvenes de la pirámide poblacional, y que la vida útil laboral de un ser humano no se ha expandido en la misma proporción que lo hizo su esperanza de vida, ya que sería inconcebible exigirle a nadie que continúe trabajando más allá de los 65 años hoy vigentes para obtener la jubilación, concluiremos que estamos ante un problema complejo, cuya solución no debe ser confiada a las leyes de mercado, sino a la gestación de adecuadas políticas públicas.

En efecto, hoy es todo un desafío garantizar a los adultos mayores un sistema de previsión social sustentable, y un digno lugar para ellos en el contexto social, que les confiera una efectiva utilidad fruto de su experiencia en la vida.

Este desafío ya está plasmado en los instrumentos jurídicos fundamentales de nuestra Nación y del mundo. La Constitución Nacional, en la reforma de 1994, introdujo en su texto la necesidad de que se “garantice la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular con respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23). Estos preceptos son también sostenidos por las Constituciones de cada una de nuestras provincias y por muchos tratados internacionales.

Dentro de este marco, es nuestra misión como legisladores brindar los elementos normativos necesarios para complementar estas declaraciones de principios

con leyes concretas que apunten a cada uno de los ejes de la temática de los adultos mayores.

Un paso importante, en ese sentido, es la sanción de la ley que crea el Consejo Federal de Adultos Mayores.

Su misión es la de asesorar, colaborar en el diseño y la coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales dirigidas a la población de 60 años y más, y fortalecer sus organizaciones, con el fin de incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio destino y sobre el de las sociedades en las que viven. El consejo participará en la definición, la aplicación y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la atención del sector, canalizando las iniciativas de los adultos mayores.

Debemos destacar que dicho consejo ya existe. Ha sido creado por el decreto 457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado en el año 2002, por resolución ministerial 113 del Ministerio de Desarrollo Social, en cuyo ámbito despliega su actividad. La aprobación de su existencia por una norma con rango de ley nacional otorga mayor fortaleza a la institución y sitúa al organismo en el lugar que merece respecto de las prioridades en cuanto a la gestación de políticas públicas.

Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como quien suscribe estas líneas prestamos todo nuestro apoyo al presente proyecto de ley.

3

**Solicitada por los señores senadores Reutemann
y Latorre. Tema: Protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres**
(O.D.-1.205/08)

Señor presidente:

La violencia contra las mujeres es la violación de derechos humanos más habitual y más tolerada por las distintas culturas del mundo. Y esto no sólo ocurre en naciones donde distintos preceptos religiosos relegan a las mujeres a un rol absolutamente secundario y la obligan a cubrirse con el chador. También existe en naciones occidentales, donde la violencia muchas veces toma formas más sutiles, pero no por ello menos injustas.

El proyecto que hemos aprobado enumera, en su artículo 5º, las distintas formas que adopta la violencia contra las mujeres. A los castigos corporales que implican la explícita violencia física, que se produce con bastante frecuencia en el seno de no pocos matrimonios, y que hasta suele ser tolerada por la víctima como un hecho casi natural, se suman formas encubiertas como el menoscabo y negación del valor productivo y social del trabajo de las amas de casa, la postergación del ascenso de las mujeres en la escala laboral o profesional o las distintas formas de intimidación para evitar que las mujeres decidan sobre cuestiones muy

personales como su deseo sexual o la planificación de su procreación.

El panorama mencionado constituye un oscuro resabio de la prehistoria, en donde el hombre, por su condición física, era quien debía salir a cazar y a pelear contra otras tribus enemigas para luchar por la supervivencia de su comunidad. Esto le daba al sexo masculino ciertos privilegios por sobre el femenino. En el contexto actual, donde la fuerza física ha sido remplazada por la fuerza de la inteligencia, hombres y mujeres luchamos codo a codo, en total igualdad de potencialidades, por el bienestar y el futuro de nuestros padres, hijos y hermanos. Hasta el trabajo de las plantas fabriles, otrora una actividad netamente masculina por la fortaleza física que requería, hoy es frecuentemente realizado por maquinarias de altísima tecnología que son manejadas tanto por hombres como por mujeres.

La norma que hemos aprobado presenta un abordaje múltiple a la problemática de la violencia contra las mujeres. Si bien el órgano de aplicación es el Consejo Nacional de la Mujer, dependiente del Poder Ejecutivo nacional, esta ley involucra también a gobiernos provinciales y municipales en el diseño e implementación de estrategias para erradicar esta violencia de género. Y suma en esta lucha a organizaciones universitarias, sindicales, empresariales y religiosas.

Dentro de la multiplicidad de acciones que impulsa la norma que este Senado ha aprobado, pueden enumerarse acciones tendientes a otorgar respuestas inmediatas al problema, como la creación de una línea gratuita para contención, información y asesoramiento en la materia, o la celebración de convenios con instituciones bancarias para el otorgamiento de créditos a mujeres que padecen violencia.

También se ha previsto medidas tendientes al entrenamiento y capacitación permanente de los distintos actores involucrados en las acciones de esta ley (funcionarios de la Justicia, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas), o la inclusión en la formación docente de elementos para la detección precoz de violencia contra las mujeres. Siempre utilizando la herramienta de la capacitación, pero esta vez, apuntando a una toma de conciencia de la sociedad, la norma promueve la inclusión de la temática en la currícula universitaria y terciaria.

Por último, se destaca el desarrollo de registros de situaciones de violencia, a fin de estudiar a fondo el fenómeno, el perfil de edad y condición social tanto de la víctima como del victimario, y el cruce interjurisdiccional de los resultados recopilados. Este monitoreo de la realidad, canalizado institucionalmente a través del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, a crearse por imperio de esta ley, habrá de permitir evaluar, entre otras cuestiones, el impacto de las políticas públicas que se implementen en la materia.

Hoy ya no quedan motivos para que un sexo tenga prerrogativas por sobre el otro, ni mucho menos para que esos pretendidos privilegios se sustenten bajo for-

ma alguna de violencia, sea ésta explícita o implícita. Seguramente, en un futuro quizá cercano, ya no queden vestigios de estas modalidades de discriminación ni de su violencia emergente. La constatación permanente de que hombres y mujeres efectuamos un aporte similar para la felicidad y el bienestar de la comunidad, hará que los prejuicios que hoy subsisten, caigan en el olvido. Mientras tanto, es misión de los hombres y mujeres que hoy nos toca cumplir el rol de legisladores, crear normas para acelerar el proceso de concientización que este proceso social lleva implícito.

Por ese motivo, tanto el senador Reutemann como quien suscribe estas líneas, prestamos todo nuestro apoyo al presente proyecto de ley.

4

**Solicitada por el señor senador Basualdo.
Tema: Enfermedad celíaca (O.D.-1.075/08)**

Señor presidente:

En referencia al proyecto con dictamen de comisión aprobado por mayoría contemplado en la Orden del Día N° 1.075 del corriente año quiero expresar mi voto positivo.

La presente ley brinda una respuesta ampliamente pedida y solicitada por los pacientes que padecen esta enfermedad, ya que en la actualidad existe un gran vacío en los sistemas vigentes de salud que no brindan la adecuada cobertura.

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el sistema de salud, tanto las obras sociales como las entidades de medicina prepaga deberán cubrir el diagnóstico, tratamiento y los productos alimenticios básicos cuyo listado y cobertura será determinado por la autoridad de aplicación, siendo éste un pilar fundamental del tratamiento de esta patología.

También me parece de mucha importancia que el Estado se encuentre presente en aquellos casos de personas que no cuentan con cobertura médica, asistiéndolos en la detección de la enfermedad, la provisión de medicamentos y la asistencia integral de su tratamiento.

La presente ley es un gran avance en la política de salud y brinda una respuesta largamente esperada por los pacientes que padecen la mencionada enfermedad.

Además, se contempla la capacitación profesional, la investigación y desarrollo y promueve la concientización de la comunidad.

Por todo lo expuesto, reitero mi total apoyo al presente proyecto de ley.

5

**Solicitada por la señora senadora Parrilli. Tema:
Sistema de pasantías educativas
(O.D.-1.111)**

Señor presidente:

Celebro que se esté tratando este tema hoy en el recinto.

Es un aporte muy importante a todos los y las jóvenes de nuestro país, que con mucho esfuerzo y esmero estudian y se capacitan día a día.

Hemos visto cómo las pasantías se han utilizado en muchos casos en forma vil. Durante años lo fueron para explotar al estudiante interesado en crecer, en formarse, en ser cada vez mejor en el camino que ha elegido. Desde distintos ámbitos se ha utilizado a las pasantías educativas como una herramienta más de precarización laboral de algunos empresarios inescrupulosos, en desmedro del trabajo registrado.

Siendo un elemento tan importante para el crecimiento de muchos jóvenes, las pasantías educativas deben tener un marco que las regule de forma eficiente y eficaz, para que a partir de éstas sean de un crecimiento personal para quien las realice, como experiencia para la realización de otros empleos. También es importante resaltar el objetivo pedagógico que deben tener las pasantías como el elemento central y guía.

Para cerrar quiero expresar mi voto afirmativo y la idea de que hay generar los mecanismos necesarios para la protección de los estudiantes y que no hayan ambigüedades, o límites borrosos entre el espacio del trabajo y el educativo.

6

**Solicitada por la señora senadora Parrilli. Tema:
Protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres
(O.D.-1.205/08)**

Señor presidente:

Es mi deseo como legisladora neuquina, preocupada por el tema de la violencia contra la mujer, traer a la reflexión esta problemática que ha sido tan silenciada y acallada.

La violencia contra la mujer debemos pensarla como una de las causas que desarticula a todos los miembros de la familia y repercute en el armónico desarrollo individual y social del ser humano, por ello interesa especialmente.

Sabemos todos que ésta es una triste y dolorosa realidad que se encuentra instalada no sólo en nuestra sociedad sino también en otras sociedades del resto del mundo con diversos matices y particularidades, pero sobre esto no voy a abundar en esta oportunidad.

Creo firmemente en la importancia de contar con una legislación integral y adecuada a los efectos de eliminar este tipo de violencia, pero la experiencia nos indica que esto no es suficiente; conocemos el caso de España que tras la aplicación de la legislación específica, ha comprobado que el registro de muertes violentas diarias continúa siendo alarmante y no ha disminuido. Es más, ahora se ha extendido a otra franja de la población: las mujeres inmigrantes. El pasado mes de septiembre, entre otras, fueron víctimas una madre boliviana y una joven argentina, esta última residente en Cádiz, ambas

manos de sus respectivas parejas. Estos crímenes –en el primer caso se trataba del padre de los hijos de la pareja–, asumen características notables de alevosía y enañamiento, tal como fueron revelados por la prensa española.

Traigo a colación estos ejemplos porque celebro la sanción de ésta esperada iniciativa que estimo muy positiva, pero deseo poner especial énfasis en la importancia que tiene llevar a cabo una efectiva prevención.

Considero que se está sacando a luz este tema. Como señalé al principio, ésta es una problemática silenciada, hoy se está visibilizando y promoviendo que las mujeres rompan con el círculo vicioso del silencio, cuenten, pidan ayuda y denuncien.

En este sentido, creo que estamos dando un paso, pero es fundamental abordar el aspecto preventivo porque está esencialmente vinculado con un cambio cultural que involucra nuestros modos de ser y de relacionarnos entre nosotros como seres humanos en sociedad. En definitiva, este problema está profundamente enraizado en la violencia que vive la sociedad en todos sus niveles y estratos, aquí y en el mundo, manifestándose en diversas formas y ámbitos. Por ello, en esta cuestión, el logro final sería poder erradicar la violencia física o psicológica en estos vínculos.

Por otra parte, concibo “la violencia contra la mujer” como una problemática en cuyo abordaje debiéramos necesariamente integrar también a los hombres, que son también parte de la misma, sea como los autores de la violencia y el maltrato hacia la mujer en todas sus formas o simplemente como testigos y miembros de una sociedad que no quiere vivir con violencia ni sufrir los dañinos efectos de la misma; que sabemos repercuten no sólo en la mujer y la familia que sufre la violencia, sino también en todos las esferas de actuación de aquellos por las proyecciones propias de nuestra vida familiar, comunitaria, social y política.

Es por ello importante que sean los hombres y no únicamente las mujeres, como víctimas directas de la violencia, los que asuman una posición activa frente a esta preocupante situación social, que no es sólo de las mujeres, no es una cuestión de género, involucra también a nuestros hijos e hijas, es de todos.

Por ello, tomando como ejemplo la acción iniciada en Canadá en 1991, por un grupo de hombres que a partir de un lamentable homicidio de mujeres y en condena al mismo, organizaron la campaña del Lazo Blanco, que consistió en invitar a otros hombres a examinar sus actitudes hacia las mujeres, a denunciar y no callar, por considerar que un hombre que guarda silencio ante la violencia contra las mujeres es parte del problema.

Durante esta campaña que, posteriormente, asumió las características de movimiento replicándose en Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Gran Bretaña y España–; los hombres se colocan una cinta de color blanco para difundir la idea de no violencia contra la mujer el día 25 de noviembre de cada año.

Mi provincia no escapa a esta cruel realidad social y es por ello que a modo de iniciar una acción de concientización y sensibilización frente a esta problemática y teniendo como especial destinatario y protagonista al hombre, he instrumentado en mi provincia esta campaña de la cinta blanca el día 25 de noviembre pasado, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con el objetivo de crear conciencia y promover la participación activa del hombre en esta problemática.

En la oportunidad se entregó a los presentes una cinta blanca y el siguiente texto contra la violencia hacia las mujeres:

Campaña de la Cinta Blanca

25 de noviembre de 2008

Neuquén

Hombres contra la violencia hacia las mujeres

En este día quiero llegar a ustedes, sí a ustedes: los hombres neuquinos que procuran vivir sin violencia en sus hogares.

Estamos más fuertes para enfrentar los problemas, somos más respetados por los otros hombres y tenemos el agradecimiento de nuestros hijos, porque les aseguramos junto a las mujeres una familia armoniosa como la que nuestro pueblo necesita.

Los jóvenes neuquinos nos ponemos hoy este lazo de color blanco que significa que nos oponemos a la violencia que se realiza contra las mujeres. Los jóvenes neuquinos nos ponemos hoy este lazo de color blanco, que significa que podemos usar la palabra para expresar nuestros sentimientos.

“El silencio no ayuda, pedí ayuda”.

Por último, quisiera destacar que el proyecto en consideración contempla en su articulado una serie de normas de asistencia protectora en beneficio del agresor, entre otras cabe resaltar, las medidas conducentes a brindar asistencia médica o psicológica, a través de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, en los lineamientos básicos previstos se incluyen programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

Para finalizar y expresando mi voto afirmativo a la presente iniciativa, quiero expresar una vez más mi pensamiento positivo orientado hacia la prevención de esta problemática, cuya instrumentación deberá llevarse a cabo a través de una política estatal articulada como bien lo expresa este proyecto de ley.

Reitero la importancia que significa poder usar la palabra para expresar nuestros sentimientos, éste ha sido el mensaje que hemos querido transmitir a los hombres, y quizás ésta sea la clave para comenzar un camino hacia la no violencia contra la mujer.

A su vez, el mensaje para nosotras las mujeres, es el de no silenciar, el de oponerse a la violencia, y pedir ayuda porque el silencio no ayuda.

Por el contrario, y parafraseando a la dramaturga Griselda Gambaro: “La tierra del silencio es la que hace el humus más fértil. Si el crimen no se nombra, es menos crimen porque la palabra es el primer testigo incómodo”.

7

Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso. Tema: Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
(O.D.-1.205/08)

Señor presidente:

Una vida sin violencia y sin discriminación es un derecho humano fundamental que, lamentablemente, no está siendo respetado, mucho menos en el caso de las mujeres. Sea en los hogares, en el ámbito laboral, privado y/o público, así como en cualquier otro ámbito, la violencia contra las mujeres debe cesar.

Para ello, resulta indispensable el dictado de normas como las que se analiza ya que la violencia contra la mujer continúa siendo un flagelo en nuestro país, a pesar de que los países de la región han suscrito significativos compromisos internacionales y regionales que incluyen propuestas y lineamientos básicos para incorporar en el diseño de sus políticas públicas y legislativas medidas tendientes a mejorar la condición social de las mujeres, y resulta necesario instrumentarlas para dar eficacia a dicha protección.

En tal sentido, resulta absolutamente loable la iniciativa propuesta, que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistencia integral a sus víctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.

Sin perjuicio de la ponderación que merece, sin lugar a dudas, dicha iniciativa de erradicar el flagelo de la violencia y la discriminación de la mujer, resulta fundamental advertir que dicha protección debe efectuarse también en el marco de la defensa del derecho a la vida del concebido. Es decir, la protección contra la violencia de la mujer, tan indispensable, no puede vulnerar la base común universal de derechos humanos, que incluye el derecho a la vida, derecho primero y fundamental.

El riesgo que queremos señalar, es que la disección en sectores de los derechos humanos, si se disocia de la base y matriz común provista, por ejemplo, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros pactos internacionales, puede implicar nuevas formas sutiles de debilitar la universalidad de esos derechos humanos prístinos intangibles e inalienables (Basset, Ursula C., “La universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en escorzo”, ponencia expuesta en el seminario “A sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del

Hombre”, noviembre, 17 de 2008, Salón de Lectura del Honorable Congreso de la Nación).

En este orden de ideas, consideramos que si la sectorización de los derechos humanos no implica la intangibilidad de los bienes básicos para todos y en todos los casos, en tal caso, habremos dado vuelta una página de la historia y reingresado al estadio de la preguerra, en que los derechos dependían del reconocimiento arbitrario que graciosamente concedieran los sujetos de poder. Los derechos ya no se tendrían por el mero hecho de pertenecer a la especie humana, sino que serían apenas una concesión del consenso que los promulgara (Basset, “La universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en escorzo”).

El artículo 30 de la Declaración Universal es una afirmación de que los derechos son comunes a todos los hombres por el solo hecho de serlo, es decir, sin discriminación alguna (ni de nacimiento, ni de condición social, etnia, religión, nacionalidad, edad o sexo) ya que dispone:

“Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que se confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.”

Los derechos sectoriales, de generaciones posteriores, son una valiosa reinterpretación y proyección de esos principios básicos en los diversos segmentos de humanidad. Sin embargo, es necesario evitar que la perspectiva quede viciada. Conforme a Basset, la muestra más tangible y más polémica de nuestros días es indudablemente el aborto, en el cual se oponen dramáticamente el derecho universal a la vida de un niño no nacido y los derechos derivados de la madre a disponer sobre su propio cuerpo. Una hermenéutica frecuente afirma que la madre tiene derecho de expulsar al huésped indeseado en algún momento del embarazo.

La protección de la vida de todo ser humano, sin hacer ningún tipo de discriminación en razón del sexo, la edad, la raza, etcétera, comienza desde el mismo momento de la concepción. Esta protección la brinda nuestro orden jurídico en el ámbito penal, civil, laboral y, fundamentalmente, en el ámbito constitucional ya que los tratados de derechos humanos celebrados por la Argentina han adquirido, a partir de la reforma de 1994, rango constitucional.

Hemos presentado un dictamen en minoría, con varios cambios *vis-à-vis* el dictamen de mayoría, algunos de los cuales fueron receptados en el plenario previo a la consideración del proyecto de ley en la sesión ordinaria.

En este sentido, el dictamen de minoría presentado propició la eliminación del artículo 1º y del artículo 16 del proyecto de ley, en tanto contenían disposiciones que, tal como estaban escritas, resultaban redundantes e innecesarias y contradictorias con la autonomía provincial, en cuanto, conforme nuestra Constitución,

las provincias conservan los poderes no delegados a la Nación, como ser el dictado de normas procesales y procedimentales. En efecto, el artículo 16 disponía que “las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen previsto” en dicha ley. No podía permitirse tal redacción en tanto no es necesario que una ley nacional disponga que las provincias dictarán normas de procedimiento. Ello les corresponde a estas últimas per se, sin necesidad de un reconocimiento expreso por ley. Sin embargo, es necesario puntualizar que lo mencionado, tanto en el caso del artículo 1º como en el del artículo 16, fue conversado durante el plenario mencionado, y subsanado en el texto final del proyecto mediante sendos agregados.

Por otra parte, el dictamen de minoría propone la eliminación de la referencia al “derecho a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos” (artículo 3º, inciso e). Referencias como tal pueden dar lugar a que se entienda como “violencia” a la oposición del derecho a la vida de un niño no nacido frente al derecho derivado de la madre de elegir cuándo tener hijos, lo que podría resultar en efectos indeseados e ilegítimos como el aborto. Dicha posible interpretación no se elimina con la referencia en que ello se efectúe de “conformidad con la ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable” por lo cual merece nuestro voto negativo.

Nuestro país ha declarado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño que, para nuestro ordenamiento jurídico, la protección de la vida de todo ser humano comienza desde la concepción. Asimismo, la Argentina expresó en el seno de la III Comisión de la Asamblea General el día 14 de noviembre de 1989 que: “Celebra que en el preámbulo del proyecto de convención se haya incluido el concepto de que el niño necesita protección y cuidados especiales tanto antes como después de su nacimiento. Ese enunciado garantizará una condición biológica y social igualitaria que redundará en beneficio del mejor desarrollo del niño” (A/C.3/44/SR.41, p.11). En igual sentido ha asumido un compromiso internacional que garantiza idéntica protección en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada en 1984.

Es decir, que la Argentina está comprometida en la defensa de la dignidad humana, en la lucha contra cualquier tipo de discriminación y de desigualdad desde el comienzo de la existencia del hombre. Es por eso que propiciamos evitar referencias confusas que puedan dar lugar a hermenéuticas equivocadas. Todo, por cuanto, como se mencionó previamente, es noble el dictado de normas que tengan como objetivo erradicar la violencia y la discriminación contra la mujer, como reconocimiento expreso de derechos humanos que las envisten. Mas ello debe efectuarse también en el marco del reconocimiento de los restantes derechos humanos fundamentales y universales.

Por otra parte, es dable mencionar que el proyecto de ley con dictamen de mayoría omite mencionar la mencionada reserva efectuada por la República Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que se sugiere agregar en el dictamen de minoría presentado, a fin de evitar cualquier interpretación en sentido contrario que pretenda considerar derogada la reserva.

Por último, es dable mencionar que el dictamen de minoría propone una nueva redacción de la definición de “violencia” contenida en el artículo 4° del proyecto de ley con dictamen de mayoría. Ello responde a que, como me referiré a continuación, tal como se encuentra redactada la definición en el proyecto de ley, que da lugar a ilícitos, no se satisfacen los presupuestos de la responsabilidad vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, es dable mencionar que el artículo 3° enumera los derechos que el proyecto de ley pretende garantizar, incluyendo en especial el de “una vida sin violencia y sin discriminaciones, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.

La definición de “violencia” referida en el artículo 3° está incluida en el artículo 4°, que dispone que es violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta [...], afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal”.

Asimismo, define la violencia indirecta como “toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica aparentemente neutra que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

Conforme surge de la relación entre tales objetivos, y las disposiciones contenidas en el artículo 16 (relativo a la garantía de protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3°), así como los artículos 19, 20, 25, 29, y 31 (sanciones), resulta evidente que el proyecto crea nuevos ilícitos, en algunos casos, y en otros, se superpondrá con algunos ya regulados. Conforme a la índole del acto, encuadrará dentro de la materia civil o penal.

Sin perjuicio de ello, para que exista “responsabilidad jurídica” en virtud de tales ilícitos, deben tenerse en cuenta los presupuestos en materia de responsabilidad previstos por uno y otro derecho. Ello es reconocido por el artículo 34 en materia de daños y perjuicios, en tanto hace mención a que “la parte damnificada podía reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según normas comunes que rigen la materia”. Sin embargo, se cae en un sinsentido dado que el postulado básico de ese reclamo (es decir, la definición de violencia), no satisface los presupuestos “de las normas comunes que rigen la materia”. Por lo tanto, si bien el artículo 34 autoriza a exigir daños y perjuicios a quien padece la violencia, es posible que si bien se aumente la litigiosidad en tal sentido, no se llegue al objetivo

deseado por cuanto quienes juzguen deberán aplicar esas “normas comunes que rigen la materia” que no se encuentran satisfechas por el artículo 4°.

Dichas “normas comunes que rigen la materia” no son ni más ni menos que los presupuestos de la responsabilidad jurídica. Conforme lo exponen Alterini, Ameal y López Cábana, la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: (1) el incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante incumplimiento de un contrato o de la violación del deber general de no dañar; (2) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente para asignar el deber de reparar al sujeto indicado como deudor. Tal factor de atribución puede ser subjetivo (culpabilidad) u objetivo; (3) el daño, que consiste en la lesión de un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y (4) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño, de forma que pueda predicarse que el hecho es causa (fuente) de tal daño (Alterini, Atilio Aníbal, Ameal, Oscar José y López Cábana, Roberto M., *Derecho de las obligaciones civiles y comerciales*; Abeledo Perrot, 2ª edición actualizada, p. 148).

Sin la concurrencia de estos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización.

En cuanto al primer presupuesto, que consiste en la infracción a un deber, la ilicitud objetiva extracontractual se encuentra regulada en el artículo 1.066 del Código Civil, que reafirma el principio de reserva porque exige ley previa a la transgresión. El principio de reserva propone que no “hay deber ni transgresión sin norma que lo imponga; principio que deriva directamente de la noción de seguridad, puesto que es preciso saber a qué atenerse” (Alterini, Ameal y López Cábana, *Derecho de las obligaciones civiles y comerciales*).

Si bien en el ámbito civil no se exige el grado de tipicidad que se exige en el ámbito penal, es necesario que al menos sea concreta, para satisfacer el principio de reserva, previsto en el Código Civil y en nuestra Constitución Nacional. El marco del artículo 4° del proyecto de ley no clarifica a qué conducta deberá atenerse, puesto que toda conducta humana es susceptible de encuadrar en ese concepto por la vaguedad de sus términos. Por ello, no parece pasar el test del principio de reserva.

Asimismo, el proyecto de ley define como modo de obrar violento “toda conducta, acción u omisión” y luego se menciona “conducta, [...] disposición, criterio o práctica aparentemente neutra”. Dichas referencias resultan observables por las siguientes razones.

En cuanto a la referencia a “conductas”, debe tenerse presente que existen conductas jurídicamente irrelevantes (Alterini, Ameal, López Cábana, ob. cit.). No todas las conductas interesan al derecho, sino que de entre la infinidad de acciones que tienen lugar en la vida de relación, sólo algunas son seleccionadas y conminadas, por ejemplo en el derecho penal, con una pena. En toda

sociedad que sostenga el pluralismo y la diversidad como realidades de la vida en comunidad, la ausencia de conflictos es una utopía. Es más, a veces cierto nivel de conflictividad ha sido aceptado en tanto ha servido como impulsor del desarrollo social.

Si se relacionan los actos con las consecuencias jurídicas, se advierten algunas conductas son indiferentes para el derecho, como las relativas a las reglas de cortesía. Tales conductas son intrascendentes. Otras, que pueden parecer indiferentes al derecho, pueden adquirir trascendencia normativa en cuanto una norma los considere antecedentes de su imputación: es el caso de la moral, las buenas costumbres (artículo 953 del Código Civil).

El proyecto de ley, por el hecho de mencionar las “conductas” no las torna específicamente relevantes como quisiera. Para ello debería identificarlas concretamente como en el caso del artículo 953 del Código Civil.

Por otra parte, la Real Academia Española define “criterio” como “2. m. Juicio o discernimiento”. En nuestro derecho, para tener consecuencias jurídicas, las conductas, actos, criterios, etcétera, deben exteriorizarse de la forma prescrita en el Código Civil. Debe tenerse presente que el artículo 913. “Ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”.

Por último, trae reparos la referencia a “aparentemente neutra que ponga en desventaja a la mujer con respecto al varón”, ya que no se comprende cómo podrá juzgarse una “aparente neutralidad” ni como podrá probarse lo contrario en un juicio sumarísimo. Tengamos presente que el proyecto de ley promueve el juicio sumarísimo por lo cual este tipo de referencias deben efectuarse con el mayor cuidado posible para resguardar el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, reconocidos en nuestra Constitución Nacional. Sin perjuicio de dicha observación, aclaramos que luego de presentado el dictamen de minoría tomamos conocimiento de la modificación de esta última referencia en el proyecto de ley con dictamen de mayoría.

En cuanto a la referencia a una “omisión”, debe tenerse presente que en el ámbito extracontractual, estas sólo pueden dar lugar a responsabilidad en el caso de que una norma expresamente imponga un deber, como en el caso del artículo 108 del Código Penal. Así lo dice expresamente el artículo 1.074 del Código Civil por lo cual deberían especificarse los deberes cuya omisión serán considerados como “violencia”.

En relación con el segundo presupuesto, el proyecto de ley no se especifica el factor de atribución aplicable. ¿Serán responsables quienes actúen con culpa, dolo o se establece una responsabilidad objetiva? Téngase presente que se propone un juicio sumarísimo, con amplitud de mecanismos de prueba, por lo cual resulta relevante definir el factor de atribución en virtud de las normas relativas a la carga probatoria. En caso de culpa y dolo, quien debe acreditarlos es el acreedor,

mientras que si fuera responsabilidad objetiva, probada la violencia, sería inútil la prueba de que se actuó sin culpa. Lo mismo ocurre con el artículo 1.071 del Código Civil: demostrado el obrar abusivo, la prueba de la diligencia del abusador resulta ineficaz por lo cual se sostiene que se trata de una responsabilidad objetiva (Alterini, Ameal, López Cábana, ob. cit.).

Un ejemplo de responsabilidad objetiva es la prevista en la ley 23.592 (actos discriminatorios). Es responsable quien menoscabe de algún modo y “arbitrariamente” el pleno ejercicio por su titular sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Se consideran, según la norma, actos u omisiones discriminatorios aquellos determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. En ese caso, se exige que la perturbación del derecho haya sido “arbitraria”, lo que consiste en proceder “contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho” (Real Academia Española).

En cuanto al tercer presupuesto, cabe mencionar que el concepto de daño que interesa en materia de responsabilidad civil es el daño en sentido estricto, entendido como la lesión, menoscabo, mengua, agravio, de un derecho subjetivo que genera responsabilidad. En el campo extracontractual, no hay acto ilícito punible “si no hubiese un daño causado, u otro acto exterior que lo pudiese causar (artículo 1.067 del Código Civil), sea que recaiga “sobre un objeto exterior, o bien se confunda con la existencia de la persona” (artículos 1.075 y 1.109, 2ª parte del Código Civil). El daño puede ser directo o indirecto. Es decir, sufrido “directamente en las cosas de su dominio o posesión” o “por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades” (artículos 1.068 del Código Civil).

Sin embargo, la definición de “violencia” contenida en el artículo 4º no hace mención al “daño” a la vida, dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, sino a la “afectación” de dichos derechos. La “afectación” no tiene definición legal como el daño. El artículo 1.067 claramente establece que faltando este último, no hay ilícito punible. Por tanto, hubiera sido recomendable recoger el concepto de daño en lugar de afectación, ya que mal podrá considerarse responsable a quien no haya causado daño, conforme lo expuesto.

Resulta preferible mantener la coherencia con este último cuerpo ya que el concepto de “afectación” es claramente subjetivo, lo que vulnera los derechos del supuesto “victimario” que sin perjuicio de no haber producido un daño puede ser susceptible de ser sancionado. Además, entorpece el propósito de la ley en cuanto busca eficacia. Introducir conceptos subjetivos demorará la sustanciación y quedará reducido a un juicio de valor subjetivo, imposible de ser objetivamente considerado por el juez.

Además, se configura una confusión en tanto podrá ser “violencia” un acto, más no producir “daño” en el sentido del Código Civil, por lo cual no podrá ser de aplicación el artículo 34 del proyecto de ley en cuanto dispone que podrá reclamar reparación “por daños y perjuicios”.

Por último, el cuarto presupuesto exige causalidad entre el daño y el hecho que se atribuye al victimario. Conforme autorizada doctrinal que ha estudiado los requisitos del daño patrimonial indemnizable, “el derecho no impone al actor del acto ilícito, como es obvio, la obligación de responder por todas las consecuencias que de cualquier modo hayan derivado de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la actividad industrial y de los intereses de la sociedad misma, que el derecho trata de regular y favorecer. De aquí la necesidad de establecer los límites de esta responsabilidad, o de otro modo, los requisitos que debe reunir el daño patrimonial para que sea jurídicamente resarcible” (Orgaz, Alfredo, *El daño resarcible*, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 30).

El proyecto de ley considera “violencia” a toda conducta, acción u omisión que de manera “directa o indirecta” afecte la vida y otros derechos. Sin embargo, debe puntualizarse que en nuestro derecho, no todas las derivaciones de un hecho son atribuibles al sujeto, sino sólo algunas de ellas imputadas con la perspectiva de justicia. En este orden las consecuencias remotas no generan responsabilidad. De ahí que en lugar de hablar de “directa o indirecta” hubiera resultado preferible omitir esa referencia para que resulten de aplicación los preceptos del código de fondo en materia de causalidad.

En virtud de todo lo expuesto, en el dictamen en minoría se propuso redactar el artículo 4° de la siguiente forma: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda acción u omisión de un deber legalmente impuesto, que tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder y arbitrariamente, cause daño a vida, libertad dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

8

Solicitada por la señora senadora Negre de Alonso. Tema: Regulación del proceso contencioso administrativo (O.D.-1.156)

Señor presidente:

Quiero comenzar brindando un homenaje al doctor Julio Rodolfo Comadira, en su doble condición de principal responsable de la redacción del proyecto y también por ser uno de los mayores especialistas en el derecho administrativo de nuestro país, además de tener experiencia en diversos cargos desempeñados en el Estado nacional, cabiendo destacar su paso al frente

de la Sindicatura General de la Nación. Con que su valiosa colaboración, nos permitió abordar esta materia con la solvencia y el respaldo necesario.

El mencionado profesor dedicó muchos años a este tema y recogió diferentes experiencias y proyectos que se habían hecho a nivel nacional sobre la regulación del proceso contencioso administrativo de otros autores brillantes como Fiorini, Linares, Marienhoff, Gordillo, Cassagne y Barra. Así, uniéndolos, agregando su aporte personal y el de la doctrina más avanzada, el doctor Comadira dio origen al proyecto que hoy estamos considerando. Por todo ello, el referido jurista, doctor Comadira, merece nuestra cálida admiración y nuestro eterno agradecimiento y reconocimiento.

Asimismo, quiero agradecer también a los juristas que participaron de las reuniones de comisión con motivo del análisis de este proyecto de ley (O.D.-1.156/08). Sus comentarios y opiniones, sembrados en su experiencia y conocimiento de la materia, fueron generalmente receptados, logrando como resultado un proyecto muy valioso desde todo punto de vista, incluyendo el práctico jurídico, que resulta fundamental.

En este sentido, agradezco muy especialmente al doctor Pedro Coviello, presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a la doctora María Cecilia Gilardi Madariaga, jueza subrogante del Juzgado N° 9, vocal de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor Carlos Balbín, juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al doctor Fabián Canda, fiscal de la Fiscalía N° 8 de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal y titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Todos ellos, gracias a su conocimiento y, más que nada, experiencia en la materia, tanto académica como profesional, contribuyeron con sus aportes y opiniones al tan ansiado y necesario proyecto que hoy estamos considerando.

El proyecto de ley resulta valioso en numerosos aspectos. En este sentido, es destacable la redacción del artículo 5° relativa a la legitimación activa, porque es preocupante la cantidad de causas que se inician con pedidos abstractos de declaración de inconstitucionalidad de leyes o reglamentos, sin acreditar mínimamente el perjuicio que le causa al actor la afectación a algún derecho. Dicha norma refuerza la regla jurisprudencial conforme a la cual el interés es condición de la acción.

Asimismo, merece reconocimiento el artículo 11 que dispone que no será necesario el agotamiento de la vía administrativa cuando el acto haya sido dictado por la máxima autoridad con intervención previa del interesado. Ese contradictorio ya se tiene en sede administrativa. Exigir el agotamiento de la vía hubiera

las exigencias derivadas del servicio que la Justicia federal se encuentra compelida a prestar.

Este proyecto busca descomprimir la delicada situación de sobrepaso que sufre la justicia federal traducido en la expansión de causas y el aumento de la complejidad de los temas a dirimir, situaciones que ponen en mora al Estado nacional respecto de obligaciones constitucionales e internacionales asumidas, relativas a facilitar los medios a efectos de operativizar derechos fundamentales, como es el caso del acceso a la Justicia.

La práctica ha demostrado que es imposible que dos juzgados (con dos secretarías, en las cuales ingresan dichas causas) sean los únicos competentes con respecto a los delitos de la índole e importancia que tratamos en el presente proyecto, cometidos en una jurisdicción con una población de alrededor de 1.400.000 habitantes.

Creemos que esta creación dinamizará la resolución de las causas e impedirá el agobio y desborde de tareas de quienes se desempeñan actualmente en los dos juzgados existentes, donde el excesivo número de procesos torna imposible la resolución en tiempo adecuado de las causas, desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho de toda persona a ser juzgada o recibir justicia en su caso, en un tiempo prudencial y razonable y sin dilaciones, precepto éste receptado por el Pacto de San José de Costa Rica, al que nuestro país adhiere.

12

Solicitada por la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales. Tema: Declaración de interés nacional del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
(S.-3.952/08)

Señor presidente:

Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hoy estamos sesionando para tratar un proyecto de ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Este proyecto aporta instrumentos importantes para luchar en contra de la violencia que sufren las mujeres en muchos ámbitos de la vida, y allí radica su importancia fundamental.

Si bien no es el proyecto perfecto, y hay cuestiones que bien ha observado la senadora Negre de Alonso, a las cuales adhiero, creo que nuestro apoyo en general significa un reconocimiento común a la lucha de todas las mujeres por la igualdad real y la no violencia.

Cabe señalar que, según un informe de la Naciones Unidas, en nuestro país muere una mujer cada tres días, lo que totaliza 110 mujeres en los primeros 10 meses del año debido a la violencia en su mayoría intrafamiliar.

En Tucumán, 13 mujeres fallecieron en el último año, víctimas de la violencia. En el Departamento de Violencia de la Municipalidad de la Capital, se producen 20 denuncias semanales. El 70 % de los victimarios son parejas, ex parejas, concubino, novio o amante.

Es cierto que estas cifras no reflejan la realidad del caso, que es mucho mayor. En nuestro país no existen registros unificados sobre casos de violencia hacia las mujeres, pero según los distintos organismos el número de denuncias crece año a año.

En los primeros 10 meses de 2008, se recibieron 52.351 denuncias, lo que significa un incremento del 266 % en relación a las de 2006, cuando hubo 19.644, informó el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

En ocho de cada 10 casos, el denunciado fue un varón. El 74 % de las víctimas fueron mujeres adultas, el 3 % niñas, y el 2 % niños, aunque las Organizaciones no gubernamentales advierten que sólo una de cada 10 mujeres que sufre la violencia llega a hacer la denuncia.

Esto es una realidad que tratamos de modificar con la sanción de este proyecto de ley.

Seguramente los datos respecto de las denuncias se incrementarán con los instrumentos que estamos creando, pero eso no quiere decir que la violencia aumentará. Por el contrario, se estará sacando a la luz una realidad oculta a la sociedad, con el objeto de modificarla.

En este proceso y con los programas de prevención a implementar, no dudo que en un futuro, la cantidad de denuncias disminuirán, no ya por un tema estadístico de recepción de las denuncias, sino por la disminución de la violencia ejercida contra las mujeres en sus distintas formas.

Digo esto porque: ¿Es violencia solamente darle golpes a una persona? Hasta ahora habíamos creído que ésta era la única forma de violencia. La psicología moderna nos ha dado una nueva visión del ser humano y de sus necesidades. Ahora sabemos que hay otro tipo de violencia que también hace daño a las personas: la violencia psicológica o verbal.

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, desprecios, abandono o insultos; también son formas de violencia. No cabe duda de que a veces los golpes al espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y dejan heridas más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia por lo general continúan sufriendo calladamente y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda. Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no tiene heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Como este tipo de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, generalmente la violencia verbal o psicológica precede a la física.

Las víctimas del maltrato verbal muchas veces piensan que éste no es lo suficientemente grave como para tratar de hacer algo para impedirlo. Algunas temen que no les creerán si denuncian al abusador, pues a menudo éste goza de una buena imagen pública.

Las que están siendo golpeadas tienen miedo a las represalias por parte del agresor ya que a menudo éste amenaza con matarla.

Otras temen enfrentar la vida a solas o simplemente no tienen los medios para hacerlo. A veces alguien que la víctima respeta le dice que debe permanecer en esa relación abusiva “por el bien de sus hijos”.

En el caso de la mujer del alcohólico o drogadicto, ella es una codependiente de su esposo o “compañero” y la codependencia es una enfermedad emocional que requiere tratamiento de un psicólogo o psiquiatra.

Todas estas mujeres tienen en común una baja autoestima y una incapacidad para poner límites porque vienen arrastrando problemas emocionales desde su niñez.

A menudo la raíz de la violencia doméstica tanto para las víctimas como para sus victimarios, es el vacío afectivo. O sea, la falta de amor y atención en su niñez.

En los hogares disfuncionales en los cuales un cónyuge maltrata al otro, es común el maltrato a los niños.

Constituye violencia no sólo el darles fuertes golpes, sino también gritarles, menospreciarlos, castigarlos excesivamente o negarles la atención, la aceptación y el amor que son tan imprescindibles para su desarrollo emocional y social.

También es un acto de violencia en el caso de los padres divorciados, el hablar mal del ex cónyuge delante de los hijos o utilizarlos para hacerle daño al otro.

Lamentablemente, cuando una mujer está siendo víctima de cualquier tipo de violencia por parte de su

esposo o “compañero”, está tan enfrascada en defenderse que a menudo no puede darse cuenta del daño que también están sufriendo sus hijos. A veces permite hasta los maltratos físicos o verbales a éstos por parte del padre o padrastro, porque se siente incapaz de detenerlos ni siquiera en lo que respecta a sí misma. Los niños que crecen en hogares violentos tienen una gran probabilidad de ser violentos en el futuro.

El tema de la violencia contra la mujer está instalado en la agenda pública, y persiste en todos los ámbitos sociales, tanto públicos como privados, a partir de hechos que operan como desencadenantes.

La importancia de este proyecto radica en favorecer el acceso de las mujeres a la Justicia y facilitar las denuncias, actuando rápidamente y evitando los distintos tipos de daños que puedan sufrir.

Venimos a cubrir la enorme brecha existente entre las discusiones y debates de políticas públicas y la realidad que padecen muchas personas en sus vidas cotidianas, en su núcleo familiar o en su comunidad.

Estamos dando un gran paso para dar una respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres en el nuestro país.

El Estado está asumiendo con este proyecto un papel acorde a la responsabilidad que tiene en cuanto a la asistencia jurídica en casos de violencia sobre las mujeres, la violencia familiar y la impunidad de los delitos sexuales.

También se implementarán herramientas para concientizar y educar para que la violencia contra las mujeres en todas sus formas desaparezca de nuestra sociedad.

Consecuentemente votamos afirmativamente en general este proyecto porque repudiamos la violencia en todos sus géneros, ya que constituye un atentado contra la vida, y en particular, hago más las disidencias expresadas por la senadora Negre de Alonso.